RÉGIMEN JURÍDICO DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO DE LAS COOPERATIVAS CATALANAS CON SECCIÓN DE CRÉDITO

Joaquim Castañer Codina

Profesor de Derecho Mercantil
Universitat Pompeu Fabra

RESUMEN

En la última década, diversas cooperativas catalanas con sección de crédito han sufrido importantes crisis económico-financieras que han provocado que necesitaran ayudas de carácter público para devolver los depósitos que les habían sido confiados. Como consecuencia, el legislador catalán ha creado el denominado Fondo cooperativo de apoyo a las secciones de crédito. Este Fondo, que se dota con recursos aportados por las propias cooperativas catalanas con sección de crédito, tiene por objeto contribuir a la devolución de los saldos acreedores de la sección de crédito a sus titulares, en caso de que ésta no pueda hacerlo por sus propios medios. El presente trabajo analiza el régimen jurídico de este Fondo, con la pretensión de poner de manifiesto sus virtudes y lagunas.

PALABRAS CLAVE: Cooperativa catalana, sección de crédito, crédito cooperativo, legislación, insolvencia, fondo financiero, protección de los depositantes.

CLAVES ECONLIT: P13, G20, C33.

LEGAL REGIME OF THE FINANCIAL SUPPORT FUND OF CATALAN COOPERATIVES WITH A CREDIT SECTION

ABSTRACT

In the last decade, several Catalan cooperatives with a credit section have suffered important economic and financial crises that have caused them to need public aid to return the deposits entrusted to them. As a result, the Catalan legislator has created the so-called cooperative fund to support the credit sections. This Fund, which is endowed with resources provided by the Catalan cooperatives with a credit section, is intended to contribute to the return of the credit balances of the credit section to their holders, in the event that they cannot do so by their own media. The present work analyses the legal regime of this Fund, with the intention of highlighting its virtues and shortcomings.

KEY WORDS: Catalan cooperative, credit section, cooperative credit, legislation, insolvency, financial fund, depositor's protection.

SUMARIO¹

1. Presentación: Las crisis financieras de las cooperativas catalanas con sección de crédito y la creación del Fondo. 2. Régimen jurídico de las secciones de crédito de las cooperativas. 3. Regulación del Fondo cooperativo de ayuda a las secciones de crédito. 3.1. Antecedentes. 3.2. Finalidad del Fondo. 3.3. Administración del Fondo. 3.4. Obligación de pertenencia del Fondo. 3.5. Aportaciones al Fondo. 3.6. Actuaciones de ayuda financiera del Fondo. Bibliografía.

1. Presentación: Las crisis financieras de las cooperativas catalanas con sección de crédito y la creación del Fondo²

El 12 de febrero de 2008, la cooperativa catalana *Copalme i Secció de Crèdit, S.C.C.L.*, presentó concurso de acreedores, lo que supuso que se congelaran los depósitos que unas 400 personas habían ingresado en la sección de crédito de la cooperativa, por un importe que se aproximaba a los 6,5 millones de euros. En el concurso se aprobó un convenio que contenía una doble previsión en torno al

1. Este trabajo se integra entre los realizados en el seno del proyecto de investigación titulado «*Protección del inversor en productos financieros: situación actual y perspectivas de futuro*», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad [DER2016-75423-P (AEI/FEDER, UE)].

2. En el presente trabajo las distintas leyes de cooperativas, estatal y autonómicas, serán abreviadas de la siguiente forma: *Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi* [LCEusk]; *Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura* [LSCExt]; *Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia* [LCGal]; *Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid* [LCCMad]; *Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas* [LCoop]; *Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja* [LCRio]; *Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León* [LCCLeón]; *Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las Illes Balears* [LCIBal]; *Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia* [LCMur]; *Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra* [LFCNav]; *Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas* [LCAst]; *Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha* [LCCMancha]; *Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas* [LSCAnd]; *Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria* [LCCan]; *Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón* [TRLCAr]; *Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana* [TRLCCVal]; *Ley 12/2015, de 9 de julio, de Cooperativas de Cataluña* [LCCat].

pago de las deudas ordinarias de la cooperativa, entre las cuales se incluía la devolución de los depósitos de la sección de crédito. Por un lado, el *Instituto Catalán del Crédito Agrario* (ICCA)³ concedió un crédito que permitió pagar la mitad de dichas deudas (y, por tanto, devolver la mitad de los depósitos de la sección de crédito) en el plazo de un mes. Por otro, gracias a los ingresos previstos procedentes del alquiler de ciertas instalaciones de la cooperativa concursada, se refinanciaron las deudas restantes, lo que debía permitir a *Copalme* regularizar su situación económica en un plazo de diez años, de modo que los acreedores (incluidos los depositantes de la sección de crédito) recuperaran el otro 50% de los créditos⁴. El acuerdo alcanzado también preveía la baja de la sección de crédito, que fue aprobada en asamblea de socios el día 11 de junio de 2010⁵.

3. El *Instituto Catalán del Crédito Agrario* (ICCA) era un organismo autónomo de carácter financiero que fue creado por la Ley 4/1984, de 24 de febrero (del Parlamento de Cataluña), estaba adscrito al Departamento de Economía y Finanzas de la *Generalitat de Catalunya*, y tenía como objetivo fomentar, coordinar y canalizar el crédito agrario en Cataluña. El ICCA fue absorbido por el *Institut Català de Finances* (ICF) con la Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras (vid. Capítulo III y DT 1ª).

4. Los datos se extraen de la noticia «Copalme ja veu la llum», en *El Punt Avui*, 12 de octubre de 2009 [<http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/281099—copalme-ja-veu-la-llum.html>]; la nota de prensa emitida por la *Generalitat de Catalunya* fechada el 23 de diciembre de 2009 y titulada «El conseller Llena es mostra “molt satisfet” del conveni de creditors de Copalme signat avui» [http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notaprensavw/84553/ca/conseller-llena-mostra-satisfet-conveni-creditors-copalme-signat.do]; y la noticia «Acord perquè Copalme pagui part dels deutes», en *El Punt Avui*, 29 de agosto de 2010 [<http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/219456-acord-perque-copalme-pagui-part-dels-deutes.html>].

5. Unos 180 afectados llegaron incluso a plantear reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración (autonómica) por los daños derivados de la declaración de insolvencia de la cooperativa, que atribuían a la omisión del ejercicio de las potestades de supervisión e inspección de la *Generalitat de Catalunya* en el ámbito de las secciones de crédito de las cooperativas catalanas. Las reclamaciones motivaron la emisión de un dictamen por la *Comisión Jurídica Asesora* de la *Generalitat de Catalunya*, que se mostraba contrario a la concesión de la indemnización pretendida por los solicitantes (vid. Dictamen 404/09, de 19 de noviembre [ponente: Susana Sartorio Albalat], que puede consultarse en http://cja.gencat.cat/es/detalls/Article/Any-2009_Dictamens_tesaurus_conceptes_doctrinals). A la vista de este Dictamen, la Resolución del *Conseller del Departament d'Economia i Finances* de la *Generalitat de Catalunya* de 14 de diciembre de 2009 rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta. Los reclamantes presentaron entonces recurso contencioso-administrativo contra dicha Resolución, que finalizó con sentencia desestimatoria. En síntesis, la STSJ Cataluña 29 abril 2013 [ponente: María José Moseñe Gracia] (ECLI:ES:TSJCAT:2013:4917) sostuvo que «*ni la Inspección ni el ICCA han incurrido en una omisión de sus funciones específicas ni por tanto en una culpa in vigilando siendo su alcance limitado a la supervisión de las cuentas sin que ello pueda convertirlos en gestores ni administradores de la entidad hasta el punto de ser responsables plenos de su actividad que si es atribuible a los órganos correspondientes de la Cooperativa*» (vid. FD 4º).

Posteriormente, en noviembre del año 2011 se produjo el colapso financiero de la sección de crédito de la *Cooperativa Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de l'Aldea, S.C.C.L.* De la noche a la mañana la sección de crédito bloqueó 1.190 depósitos de unos 3.000 clientes con un valor de más de 5,5 millones de euros. La cooperativa fue declarada en concurso de acreedores por auto de 11 de abril de 2012⁶ y fueron imputadas diversas personas (p.ej., el gerente de la cooperativa, el director de la sección de crédito o, entre otros, el auditor de cuentas) por la presunta comisión de los delitos de administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida⁷. Sin embargo, antes de presentar la solicitud de concurso la cooperativa había llegado a un acuerdo con la *Generalitat de Catalunya* que, en lo que ahora interesa, suponía la adopción de cuatro medidas. En *primer* lugar, la devolución antes de que acabara el año 2011 de, por un lado, la totalidad del saldo de las cuentas a la vista que no superaban los 1.000 euros y, por otro, la totalidad de los primeros 1.000 euros y la mitad del resto del saldo si la cuenta superaba este importe. En *segundo* término, el reintegro dentro del primer trimestre del año 2012, del resto de los depósitos a la vista y prácticamente la mitad de las imposiciones a plazo. Todos estos pagos se realizaron con el producto de la venta de activos financieros de la cooperativa (p.ej., Letras de Tesoro o Bonos de la *Generalitat*) y la cesión de la cartera de créditos a las secciones de crédito de otras cooperativas. En *tercer* lugar, la liquidación de los restantes depósitos a lo largo del

6. El edicto del auto de declaración de concurso fue publicado en el BOE n. 99, de 25 de abril de 2012. Y, entre las muchas noticias publicadas en torno a esta declaración de concurso, en las que aparecen los datos económicos que se han reseñado, destacamos las tres siguientes: «La cooperativa de l'Aldea presentará concurso de acreedores para sobrevivir», *El País*, 30 de marzo de 2012 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/30/catalunya/1333128287_883569.html]; «La cooperativa de L'Aldea presenta concurso de acreedores», *El País*, 11 de abril de 2012, [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/11/catalunya/1334171083_155910.html]; y «El juez aprueba el concurso de acreedores de la cooperativa de L'Aldea», *El País*, 13 de abril de 2012 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/13/catalunya/1334313629_140813.html].

7. Vid. para mayor detalle sobre las personas imputadas y las conductas delictivas que se les atribuyen, las noticias «Imputado el ex director de la sección de crédito de la cooperativa de L'Aldea», *El País*, 12 de diciembre de 2012 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/catalunya/1355327230_170992.html]; «Imputan a un perito de la Generalitat por el "corralito" de L'Aldea», *El País*, 20 de febrero de 2013 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/catalunya/1361355291_926749.html]; «Imputado un ex director de Bankia por el "corralito" de L'Aldea», *El País*, 9 de mayo de 2014 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/09/catalunya/1399593797_113877.html]; o «Imputan a Bankia por la quiebra de la cooperativa de l'Aldea» en el diario *El País*, 5 de diciembre de 2014 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/05/catalunya/1417809568_767502.html].

segundo trimestre de 2012 de forma paulatina, a partir de los rendimientos generados por la propia actividad económica de la cooperativa. En *fin*, la última medida era la desaparición de la sección de crédito⁸.

Más tarde, en junio de 2014 la tarraconense *Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit d'Ulldecona, S.C.C.L.*, bloqueó las cuentas de los 350 impositores socios de la entidad, después de que su asamblea rechazara aportar el 25% de los 500.000 euros que se estimaban necesarios para poder extinguir la sección de crédito y devolver los depósitos a sus clientes (el otro 75% debía pedirse a dos entidades de crédito, con el aval de la *Generalitat de Catalunya*)⁹. La situación se solucionó posteriormente cuando la cooperativa obtuvo en octubre de 2014 un préstamo de 530.000 euros con el que pudo hacer frente a la devolución de los depósitos de la sección de crédito. El préstamo fue concedido gracias al aval por el 75% de su importe otorgado por la *Generalitat* en tanto que el 25% restante se garantizó a través de la pignoración a favor de la entidad prestamista de un depósito de 132.500 euros. Este depósito fue posible con las aportaciones voluntarias que realizaron los socios después de su aprobación en la asamblea general extraordinaria de la cooperativa de 22 de julio de 2014¹⁰.

En fin, el 22 de diciembre de 2015 la sección de crédito de la *Cooperativa Agrícola de Cambrils, S.C.C.L.*, también en la provincia de Tarragona, cerró por sorpresa sus oficinas, dejando bloqueados unos 32 millones de euros en depósitos correspondientes a 5.270 clientes¹¹. Pese a que, con anterioridad, la asam-

8. Vid. para los datos de los clientes afectados y el acuerdo de devolución de los depósitos, «Los afectados de L'Aldea recibirán la mitad de sus ahorros antes de Navidad», *El País*, 16 de diciembre de 2011 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/16/catalunya/1324037312_387059.html]; «La cooperativa de l'Aldea deixarà de tenir secció de crèdit» *El Periódico de Catalunya*, 17 de diciembre de 2011 [<http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/cooperativa-laldea-deixara-tenir-seccio-credit-1274250>]; y «Los afectados de la cooperativa de L'Aldea empiezan a recuperar sus ahorros», *El Periódico de Catalunya*, 23 de diciembre de 2011 [<http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/los-afectados-cooperativa-laldea-empiezan-recuperar-sus-ahorros-1285483>].

9. Vid. «La sección de crédito de la cooperativa de Ulldecona bloquea cuentas de los socios», *El País*, 27 de junio de 2014 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/27/catalunya/1403892533_937038.html].

10. Vid. «La Cooperativa Agrícola d'Ulldecona continua avançant cap a la viabilitat», noticia publicada en la página web de la *Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya* (FCAC), el 17 de octubre de 2014 [<http://www.cooperativesagraries.cat/ca/premsa/68-la-cooperativa-agricola-dulldecona-continua-a.html>].

11. Aunque inicialmente la prensa señaló que había unos 1.500 clientes afectados, estimaciones más recientes consideran que esta cifra ha de elevarse hasta los 5.270 clientes. Vid. «La Cooperativa Agrícola ha retornat més de 10 milions d'euros en tres dies», *Revista de Cambrils*, 12 de agosto de 2016

blea de socios había acordado un cierre ordenado de la sección de crédito previsto para el 31 de diciembre de 2015 (tutelado por la *Generalitat* y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña [FCAC]) y el traspaso de las cuentas al BBVA, la falta de liquidez abortó la operación¹². Poco después la cooperativa presentó *preconcurso* de acreedores, es decir, realizó la comunicación prevista en el artículo 5.bis de la *Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal*¹³. El acuerdo de refinanciación que se aprobó y homologó judicialmente¹⁴ debe permitir la devolución de la totalidad de los depósitos, en dos fases. En una *primera* fase, que tuvo lugar a partir del 5 de agosto de 2016, se devolvieron alrededor del 46% de los depósitos de la sección de crédito¹⁵. Este reintegro fue posible gracias principalmente a un préstamo por importe de 10 millones de euros concedido por la FCAC a través de la ASC, S.C.C.L.¹⁶, a un préstamo participativo por importe de 3 millones de euros suscrito por la sociedad pública *Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya (AVANÇSA)* y a los 2 millones de euros procedentes de la subrogación por parte de una entidad de crédito (*Ibercaja*) en los

[http://www.revistacambrils.cat/index.php?c_noticia=21783], donde se dice que el presidente de la cooperativa «señaló que se había dicho, durante mucho tiempo, que los afectados por la quiebra de la Cooperativa Agrícola eran 1.500 cuando en realidad son 5.270. La cifra de los 5.000 afectados se dio a conocer públicamente, por primera vez, en la asamblea que la Plataforma de Afectados realizó el pasado 24 de julio» de 2016 (en catalán en el original).

12. Vid. «La Cooperativa de Cambrils cierra su sección de crédito», *El Mundo*, 21 de diciembre de 2015 [<http://www.elmundo.es/cataluna/2015/12/21/56785c3de2704ecb2b8b4585.html>]; y «La “caja” de la cooperativa de Cambrils deja atrapados a 1.500 ahorradores», *El País*, 23 de diciembre de 2015 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/22/catalunya/1450813182_830314.html].

13. Vid. en torno a esta presentación de *preconcurso*, la noticia «La Cooperativa de Cambrils cierra su sección de crédito el 31 de diciembre», *La Vanguardia*, 22 de febrero de 2015, actualizado a 4 de enero de 2016 [<http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20151222/30976840881/cooperativa-cambrils-cierre-seccion-credito-diciembre.html>].

14. Vid. BOE n. 139, de 9 de junio de 2016.

15. Vid. «La Cooperativa Agrícola retornarà poc més del 46% dels imports retinguts a partir del 5 d'agost», *Revista de Cambrils*, 22 de julio de 2016 [http://www.revistacambrils.cat/index.php?c_noticia=21659]; y «La Cooperativa Agrícola ha retornat més de 10 milions d'euros en tres dies», *Revista de Cambrils*, 12 de agosto de 2016 [http://www.revistacambrils.cat/index.php?c_noticia=21783].

16. Como se detallará más adelante, ASC, S.C.C.L., es una cooperativa catalana de segundo grado cuyos socios son cooperativas catalanas con sección de crédito y que les presta diversos servicios relacionados con la gestión diaria del funcionamiento de la sección de crédito.

préstamos hipotecarios que había concedido la sección¹⁷. La *segunda* fase del plan, consistente en la devolución del porcentaje restante de los depósitos, está previsto que se realice a plazos durante los próximos 15 años¹⁸. En la actualidad, la cooperativa sigue existiendo pero, como es lógico, ha desaparecido su sección de crédito¹⁹.

Estas, y otras²⁰, crisis financieras que han sufrido en los últimos años algunas de las secciones de crédito de las cooperativas catalanas, han puesto de manifiesto la debilidad de la posición de sus depositantes, desde una doble perspectiva. Por un lado, ya que el único patrimonio que garantiza la devolución de los depósitos son los bienes de la propia cooperativa, al no existir ningún mecanismo externo que garantice dicho reembolso (p.ej., un fondo de garantía de tales depósitos, un

17. Vid. «Comença el procés de pagament als impositors de la Caixa Agrària», *Revista de Cambrils*, 5 de agosto de 2016 [http://www.revistacambrils.cat/index.php?c_noticia=21740]. En el acuerdo de refinanciación se había previsto que en esta fase se devolvieran el 40% de los depósitos pero los ingresos derivados de los créditos en que se subrogó *Ibercaja* permitieron elevar este porcentaje hasta el 46% final.

18. Vid. «Los afectados de la Cooperativa Agrícola de Cambrils están hartos de esperar», *Revista El Triangle*, 12 de junio de 2016 [<http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/06/los-afectados-de-lacooperativa-agricola-de-cambrils-estan-hartos-de-esperar-5899.php>]. En realidad, eran 17 años pero el aumento del porcentaje de pago del 40% al 46% que se ha señalado ha permitido reducir en dos años el plazo.

19. También se ha iniciado procedimiento penal por delito de administración desleal contra diversas personas que eran miembros del consejo rector y altos cargos de la cooperativa en el momento del cierre de la sección de crédito. Vid. p.ej., «El jutge admet a tràmit la querella contra els dirigents de la Cooperativa Agrícola de Cambrils», *Diari Més Digital*, 14 de marzo de 2016 [http://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2016/03/13/el_jutge_admet_tramit_querella_contra_els_dirigents_cooperativa_agricola_cambrils_547_1093.html]; y «Otros once afectados se querellan contra la Cooperativa de Cambrils», *La Vanguardia*, 8 de noviembre de 2016 [<http://www.lavanguardia.com/local/reus/20161108/411681422102/otros-once-afectados-querellan-contra-cooperativa-cambrils.html>].

20. En el texto hemos destacado los cuatro casos que mayor impacto social y mediático han tenido. Pero ha habido otros casos menos conocidos donde una cooperativa catalana con sección de crédito ha sido declarada en concurso o ha tenido que liquidarse por problemas económicos. Así, por ejemplo, el 31 de enero de 2011 se declaró el concurso de la cooperativa leridana *Camp i Secció de Crèdit de Sarroca*, S.C.C.L. (vid. BOE n. 39, de 15 de febrero de 2011); el 18 de noviembre de 2011 se declaró el concurso de la cooperativa de la provincia de Barcelona *Celler de l'Arboç i Secció de Crèdit*, S.C.C.L. (vid. BOE n. 289, de 1 de diciembre de 2011); o también es conocido que el 20 de diciembre de 2013 la asamblea general de la *Cooperativa Agrícola Catalana i Secció de Crèdit Mont-Roig del Camp*, S.C.C.L., ubicada en la localidad tarraconense de Mont-Roig del Camp, acordó la disolución de la cooperativa por imposibilidad de realizar el objeto social debido a los problemas económicos que arrastraba (vid. el anuncio de disolución y apertura de liquidación de la cooperativa en el DOGC núm. 6682, de 8 de agosto de 2014).

seguro similar al de crédito, etc.)²¹. Por otro, porque tales depositantes son meros acreedores ordinarios que no ostentan privilegio alguno en la restitución de las cantidades depositadas, ni siquiera cuando la cooperativa se encuentra en situación concursal²².

Hasta ahora la mayoría de estas crisis habían podido solventarse mediante el otorgamiento de avales por parte de la *Generalitat de Catalunya* a favor de la cooperativa afectada que le permitían conseguir financiación (p.ej., de una entidad de crédito) con que poder hacer frente a la devolución de los saldos acreedores de la sección de crédito²³. Sin embargo, la creciente dificultad para obtener esta

21. Pese a que la sección tenga un patrimonio separado [vid. p.ej. artículos 5.1 LCoop o 2.e) LCCat], son *todos* los bienes de la cooperativa lo que en último término responden de la devolución de los depósitos y no solo el patrimonio vinculado o adscrito a la sección. En efecto, si bien el legislador suele prever que de las obligaciones derivadas de la actividad de la sección responda en primer lugar «*su patrimonio separado*» (artículo 12.1 LSCAnd) o «*las aportaciones hechas o prometidas y las garantías presentadas por los socios integrados en la sección*» (artículos 5.2 LCoop o 8.6 TRLCCVal), seguidamente añade que esta responsabilidad primaria se produce «*sin perjuicio de la responsabilidad universal de la cooperativa*» (artículo 5.2 LCoop) o «*sin perjuicio de la responsabilidad general o unitaria de la cooperativa*» [artículo 2.e) LCCat o 12.1 LSCAnd]. No obstante, debemos advertir que esta responsabilidad universal o unitaria de la cooperativa no resulta generalmente de aplicación en las fases o promociones de cooperativas de viviendas, donde suele preverse que «*los bienes que integre el patrimonio debidamente contabilizado de una promoción o fase no responderán de las deudas de las restantes*» (artículo 90 *in fine* LCoop) o que los socios no integrados en cada una de las promociones no se verán responsabilizados por la gestión económica del resto (artículo 126.1 LCCat).

22. Vid. en particular, Paloma BEL DURÁN: «As secciones de crédito e a garantía de depósitos», *Cooperativismo e Economía Social*, nº 31, 2008/2009, pp. 201-207, espec. p. 202; y Ramón BORJABAD BELLIDO: *La Sección de Crédito en la Sociedad Cooperativa Agraria Catalana*, 2015, tesis doctoral, disponible en <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/286227/Trbb1de1.pdf?sequence=2>, pp. 275-276. Desde esta perspectiva, hay que tener en cuenta que no se aplica a los depósitos de las secciones de crédito de las cooperativas la DA 14ª de la *Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión*, que refuerza la posición de muchos de los depositantes de las entidades de crédito declaradas en concurso, estableciendo que su crédito a la devolución de las cantidades depositadas se calificará como privilegiado general del artículo 91.5º de la *Ley Concursal*.

23. Vid. p.ej., artículo 38.6 de la *Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2015*, que dispone que «[s]e autoriza al Gobierno a prestar avales hasta una cuantía máxima global, en 2015, de 25.000.000 de euros, en garantía de las operaciones financieras que suscriban las cooperativas agrarias con sección de crédito inscritas en el Registro General de Cooperativas. Estas operaciones financieras deben tener como objeto la devolución a sus titulares de los fondos depositados en las secciones de crédito, siempre que los socios hayan acordado la baja de la correspondiente sección de crédito previamente a la formalización del aval. Dicho aval cubre como máximo el 75% de la operación de financiación, y los miembros del consejo rector de la cooperativa deben garantizar en todo momento el porcentaje complementario, ampliando estas garantías a los socios de la cooperativa si así lo determina la entidad que otorga la financiación en función del riesgo de cada operación».

financiación (derivada de la propia debilidad estructural del sistema bancario) y el aumento del número de secciones con problemas y sobre todo de la cuantía de los depósitos afectados, han llevado a la *Generalitat* a la convicción de que la situación no puede seguir comprometiendo fondos públicos y que tiene que ser el propio sector cooperativo quién asuma las ayudas a las secciones de crédito con dificultades.

Esta convicción ha llevado al Gobierno de la *Generalitat de Catalunya* a crear un fondo que se nutre con aportaciones realizadas por las cooperativas catalanas con sección de crédito y cuyo objetivo es que puedan devolverse los saldos acreedores de la sección cuando la cooperativa, por insolvencia o falta de liquidez, no esté en condiciones de hacerlo. Este fondo ha sido bautizado con el nombre de *Fondo cooperativo de apoyo a las secciones de crédito* (en adelante: el Fondo)²⁴.

El Fondo fue creado e inicialmente regulado mediante el *Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas*²⁵, posteriormente convalidado por Resolución 181/XI del Parlamento de Cataluña, adoptada en el Pleno celebrado el día 9 de junio de 2016²⁶. El uso de la figura del Decreto Ley,

24. Aunque el Fondo se crea en Cataluña y para las secciones de crédito de cooperativas agrarias catalanas, es indudable que las crisis no son patrimonio exclusivo de esta Comunidad Autónoma. Y, así, por ejemplo, en Cantabria, en el año 2006, la sección de crédito de la *Sociedad Cooperativa del Campo y Sección de Crédito de Monte*, que actuaba sin ningún control financiero institucional, cerró las puertas y bloqueó las cuentas de unas 2.600 personas. La cooperativa presentó concurso de acreedores por deudas de más de 20 millones de euros. Unos cuatro años después todos los afectados recobraron su dinero gracias a un convenio firmado con el Gobierno de Cantabria y el Banco de Santander. Y siete años más tarde se iniciaba el juicio contra el gerente de la cooperativa y otros seis acusados por la comisión de delito societario y apropiación indebida. Vid. la noticia «Seis años después, la quiebra de la cooperativa de Monte ya tiene juicio», *El Diario Montañés*, 16 de marzo de 2012 [<http://www.eldiariomontanes.es/20120316/local/santander/seis-anos-despues-quiebra-201203161254.html>]. En este juicio, el Tribunal Supremo condenó a los acusados a diversas penas de prisión, que van del año y nueve meses a los seis años y un día, así como al pago de diversas cantidades en concepto de indemnización. Vid. STS 28 enero 2014 (ponente: José Manuel Maza Martín) [ECLI:ES:TS:2014:484]. O, recientemente, se ha conocido el caso de la cooperativa de aceite *Coperunión Soc. Coop. And. (Unioliva)* de Úbeda (Jaén), que en el mes de agosto de 2016 empezó a denegar la devolución de depósitos a unas 2.000 personas por incapacidad de afrontar los pagos, calculándose que tiene un «agujero» en su sección de crédito de 31 millones de euros. Vid. la noticia «La segunda mayor cooperativa de aceite impone un “corralito” a sus inversores», *El Economista.es*, 20 de octubre de 2016 [<http://www.economista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/7902942/10/16/La-segunda-mayor-cooperativa-de-aceite-impone-un-corralito-a-2000-inversores.html>].

25. Publicado en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), nº 7123, de 19 de mayo de 2016.

26. Vid. DOGC nº 7143, de 16 de junio de 2016.

que se justificaba brevemente en la propia norma en una imprecisa necesidad de «actuar de manera inmediata», provocó numerosa oposición dentro del sector cooperativo catalán, siendo las quejas principales la imposición unilateral de la medida y la falta de consenso con las cooperativas afectadas²⁷.

Esta presión del sector cooperativo, junto con la abierta beligerancia contra la medida de un grupo de cooperativas con sección de crédito (que inicialmente se negaron a hacer la aportación al Fondo que les correspondía)²⁸, provocaron la decisión de tramitar la norma como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia²⁹. La tramitación concluyó con la promulgación de la *Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas* (en adelante: LRSCC)³⁰.

Esta Ley ha derogado tanto la precedente Ley 6/1998 (reguladora de las secciones de crédito de las cooperativas catalanas) como el Decreto Ley 2/2016 (que creó y reguló inicialmente el Fondo). La nueva norma no solo ha introdu-

27. Los sectores críticos con la creación del Fondo señalaron que, en realidad, la extraordinaria y urgente necesidad de la norma era consecuencia de la crisis de la sección de crédito de la Cooperativa de Cambrils (que estalló en diciembre de 2015) ya que la FCAC necesitaba de forma apremiante 10 millones de euros para poder hacer frente a un crédito que había acordado conceder a dicha Cooperativa, y que debía servir para devolver un 40% de los depósitos de los clientes de la sección de crédito. Vid. p.ej., «Unió de Pagesos acusa al Govern de crear el fons cooperatiu pel préstec promès a la Cooperativa de Cambrils», *CambrilsDiari.cat*, 6 de junio de 2016 [<http://delcamp.cat/cambrilsdiari/noticia/477/unio-de-pagesos-acusa-al-govern-de-crear-el-fons-cooperatiu-pel-prestec-promes-a-la-cooperativa-de-cambrils>]; y «El préstamo para la Cooperativa de Cambrils se firmó sin tener el dinero», *Diari de Tarragona*, 1 de junio de 2016, [<http://www.diaridetarragona.com/costa/63508/el-prestamo-para-la-cooperativa-de-cambrils-se-firmo-sin-tener-el-dinero>]; así como la intervención del diputado Sr. Francisco Javier DOMÍNGUEZ SERRANO (GP *Ciutadans*) en el debate de convalidación del Decreto Ley 2/2016 (vid. *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, XI Legislatura, segundo periodo, serie P, número 28, Pleno del Parlamento, Sesión 18, segunda y última reunión, jueves 9 de junio de 2016 [en adelante: DSPC 9 junio 2016], p. 28).

28. Estas cooperativas que no están de acuerdo con la creación del Fondo se constituyeron en la asociación denominada *Plataforma Anti-Fons Obligatori*. La Plataforma ha llegado a agrupar 26 cooperativas agrícolas catalanas con sección de crédito, es decir, casi un tercio del total (79). Las actividades y noticias de esta Plataforma pueden consultarse en la página <https://www.facebook.com/Plataforma-anti-fons-obligatori-1712690192334204/>. En esta página informan incluso de que el día 3 de junio de 2016 presentaron un recurso contencioso-administrativo para obtener la nulidad del Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo.

29. Vid. sobre esta decisión, el *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, XI Legislatura, segundo periodo, número 171, jueves 30 de junio de 2016, p. 10.

30. Publicada en el DOGC nº 7386, de 8 de junio de 2017; y en el BOE nº 160, de 6 de julio de 2017.

cido modificaciones respecto a la regulación inicial del Fondo, que serán tratadas a lo largo del presente trabajo, sino que también ha incorporado diversas medidas con una cuádruple finalidad: *primera*, mejorar la transparencia de la actividad de la sección de crédito ante sus usuarios; *segunda*, reforzar la profesionalidad de los órganos de administración y dirección de las cooperativas con sección de crédito; *tercera*, aumentar la coordinación entre la Administración supervisora y los auditores de cuentas de estas cooperativas; y *cuarta*, adaptar las reglas de funcionamiento de la sección de crédito al marco establecido por la Ley 12/2015, de 9 de julio, de Cooperativas de Cataluña³¹.

El presente trabajo se dirige al estudio crítico del *Fondo cooperativo de apoyo a las secciones de crédito*. En particular, queremos examinar la finalidad de su creación y su régimen de funcionamiento, prestando especial atención a su administración, su dotación y las actuaciones de apoyo financiero que puede instrumentar. No obstante, antes de ello queremos realizar diversas consideraciones generales en torno a las secciones de crédito de las cooperativas (*supra* apartado 2).

2. Régimen jurídico de las secciones de crédito de las cooperativas

Todas las leyes de cooperativas de nuestro país admiten que los estatutos prevean y regulen la constitución y funcionamiento de secciones con la finalidad de que desarrollen, dentro del objeto social, actividades específicas, con autonomía de gestión, patrimonio separado, y cuentas de explotación diferenciadas, sin perjuicio de la contabilidad general de la cooperativa³².

En concreto, la normativa catalana prevé que «[l]os estatutos sociales pueden establecer la existencia de secciones (...) y deben fijar sus competencias» (artículo 6 LCCat) y las define como «las unidades organizativas internas de la cooperativa, con autonomía de gestión, posibilidad de patrimonios separados al efecto y contabilidad separada, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa. Estas

31. Vid. especificando estos objetivos de la Ley 7/2017, el decimoprimer párrafo de su preámbulo.

32. Vid. artículos 5.1 LCoop, 6 LCEusk, 112 LSCExt, 9 LCGal, 6 LCCMad, 7 LCRio, 6 LCCLeon, 7 LCIBal, 7 LCRMur, 9 LFCNav, 6 LCAst, 9 LCCMancha, 12 LSCAnd, 9 LCCan, 6 TRLCAR y 8 TRLCCVal. Un panorama legislativo de la normativa autonómica puede verse en Amparo MELIÁN NAVARRO: «Divergencias legislativas de las secciones de crédito de las cooperativas en España», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 51, Abril 2005, pp. 131-166, espec. pp. 139-141.

secciones pueden constituirse, dentro del objeto social de la cooperativa, para llevar a cabo actividades económicas o sociales específicas o para desarrollar el objeto social de la cooperativa en un determinado ámbito territorial» [artículo 2.e) LCCat].

Una cooperativa puede constituir secciones con distintos objetivos (p.ej., secciones de cooperativas de viviendas para la construcción de promociones por fases, secciones de cooperativas de transporte para el distinto ámbito territorial donde se opera, etc.), pero es indudable que uno de los tipos de sección más conocido —y también más problemático— lo constituyen las secciones de crédito³³.

La sección de crédito se ha definido como «*una demarcación económica y funcional en el seno de una cooperativa que, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa de la que forma parte, actúa como entidad financiera limitando sus operaciones activas y pasivas al ámbito de la cooperativa y a sus socios*»³⁴. En relación con este concepto, queremos realizar una aclaración e introducir un matiz. La *aclaración* es que, como bien se dice, la sección de crédito «*actúa como entidad financiera*», llevando a cabo actividades de carácter bancario (p.ej., recibe depósitos de dinero, concede préstamos, etc.)³⁵, pero no es una entidad financiera ni está sujeta a la supervisión del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores³⁶. Y el *matiz* es que, en los últimos tiempos, el objeto

33. Afirma Gemma FAJARDO GARCÍA: «Las secciones de crédito en el ordenamiento jurídico español», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 32, Agosto 1999, pp. 9-37, espec. p. 12, que «[p]odemos encontrar en la realidad numerosos tipos de secciones; sin embargo el legislador tradicionalmente solo ha previsto expresamente y regulado, aunque escasamente, algunos supuestos especiales de secciones: las de crédito y las fases o promociones de las cooperativas de viviendas».

34. Vid. este concepto en FAJARDO GARCÍA: «Las secciones de crédito...», p. 13; y sobre la sección de crédito como unidad funcional sin personalidad jurídica integrada en una cooperativa, STS 5 octubre 1988 [ponente: Ramón López Vilas] (ECLI:ES:TS:1988:9412).

35. Vid. para un panorama general de las funciones que realizan las secciones de crédito, Montserrat PUENTE GARCÍA: «La capacidad operatoria de las cooperativas de crédito frente a las secciones de crédito», *REVESCO*, nº 63, 1997, pp. 121-146.

36. En particular, aunque la cooperativa con sección de crédito realice actividades de carácter bancario, carece de la condición de entidad de crédito. Afirmación que resulta claramente del artículo 1 de la *Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito*, y que es reiterada constantemente tanto por la doctrina (vid. especialmente, FAJARDO GARCÍA: «Las secciones de crédito...», pp. 24-26) como por la propia normativa reguladora de las secciones de crédito (vid. p.ej., el preámbulo de la *Ley 7/2017*, donde se deja claro que «las secciones de crédito de las cooperativas agrarias no son entidades financieras», o el artículo 11.3 de esta misma Ley, en la que se les prohíbe el uso en su denominación, marcas y documentación de expresiones que puedan llevar a confusión con las entidades financieras).

de la sección se amplía subjetivamente (incluyendo a ciertos familiares de los socios u otras personas vinculadas de otro modo a la cooperativa, como son los trabajadores) y/o objetivamente (comprendiendo también actividades de carácter doméstico de los socios)³⁷.

Aunque casi todas las leyes de cooperativas de nuestro país prevén de forma expresa la posibilidad de crear secciones de crédito³⁸, lo cierto es que solamente las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Extremadura y Andalucía han desarrollado su régimen jurídico. Las tres primeras han decidido promulgar normas específicas para las secciones de crédito de las cooperativas³⁹, en tanto que la última ha optado por incluir dicho régimen en el Reglamento de su Ley de cooperativas⁴⁰.

37. En particular, en el caso catalán, el artículo 1.3 LRSCC establece que las secciones de crédito deben limitar la gestión de operaciones activas y pasivas dentro de la misma cooperativa a los socios comunes y a los socios colaboradores, y el artículo 2.3 LRSCC añade que, a estos efectos, se asimilan a los socios comunes las personas siguientes: (a) los miembros de la comunidad familiar que tengan una relación de afinidad o consanguinidad de primer grado con los socios que cumplen los requisitos legales para tener la condición de socio común en una cooperativa agraria y que lleven a cabo una actividad económica que dependa o sea afecta a la actividad económica de estos socios; (b) los trabajadores de la cooperativa; y (c) las personas jubiladas que, en sus tres últimos años de vida profesional activa, habían tenido la condición de socio común en una cooperativa agraria.

38. Vid. artículos 5.4 LCoop, 6.3 LCEusk, 112.3 LSCExt, 10 LCGal, 112.3 LCCMad, 7.5 LCRio, 6.3 LCCLeon, 7.5 LCIBal, 8 LCRMur, 6.3 LCAst, 9.7 LCCMancha, 12.5 LSCAnd, 9.9 LCCan, 6.6 TRLCAr y 8.2 TRLCVal. La única ley autonómica que no prevé de un modo expreso las secciones de crédito de las cooperativas es la LFCNav. Vid. en torno a la concreta previsión de las secciones de crédito en las leyes autonómicas de cooperativas el trabajo ya citado de MELIÁN NAVARRO: «Divergencias legislativas...», p. 141; así como, más recientemente, Fernando VALENZUELA GARACH y Francisco Javier VALENZUELA GARACH: «Cooperativas de crédito», en pp. 1175-1206 de *Tratado de Derecho de Cooperativas* (dir.: J.I. Peinado Gracia), Vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1200-1204.

39. En Cataluña hay que mencionar la reciente *Ley 7/2017, de 2 de junio, de régimen de las secciones de crédito de las cooperativas*, que ha derogado la *Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas*; y el aún vigente *Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, de desarrollo de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas*. En Valencia destacan el *Decreto Legislativo 1/2015, de 10 de abril, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de la actuación financiera de las cooperativas con sección de crédito en la Comunitat Valenciana*; y el *Decreto 99/2007, de 6 de julio, del Consell, sobre Cooperativas con Sección de Crédito en la Comunitat Valenciana*. Y en Extremadura encontramos la *Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo en Extremadura*; y el *Decreto 129/2002, de 24 de septiembre, por el que regula el funcionamiento de las Secciones de Crédito de las Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura*.

40. En efecto, si bien Andalucía no ha dictado una norma específica para las secciones de crédito, sí ha incluido una regulación detallada de las mismas en el Reglamento que desarrolla su Ley de Cooperativas, esto es: el *Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas* (vid. artículos 11 a 18).

Concretamente, el legislador catalán establece que el objeto de la sección de crédito de una cooperativa es el cumplimiento de alguna de las siguientes tres finalidades: *primero*, contribuir a la financiación de las operaciones de la cooperativa; *segundo*, contribuir a la financiación de actividades de los socios comunes vinculadas a la actividad de la cooperativa o a las necesidades domésticas de los socios comunes y de los socios colaboradores; y *tercero*, gestionar de forma conjunta las disponibilidades líquidas de los socios comunes y de los socios colaboradores (artículo 1.4 LRSCC)⁴¹.

Por regla general, se permite la creación de secciones de crédito en las cooperativas de cualquier clase excepto en las de crédito⁴². No obstante, en algunas leyes autonómicas también se prohíbe expresamente que pueda haber sección de crédito en las cooperativas de seguros⁴³. Pero sin duda la normativa más restrictiva es la catalana que solamente contempla la creación de secciones de crédito en las cooperativas agrarias⁴⁴.

41. Los socios comunes «*son los vinculados con la actividad de la cooperativa mediante un vínculo social de duración indeterminada y que llevan a cabo la actividad cooperativizada*» (artículo 24 LCCat). No obstante, ya hemos señalado que en el ámbito de las secciones de crédito, se asimilan a los socios comunes –y, por tanto, puede realizar operaciones con la sección– los siguientes sujetos: (i) los miembros de la comunidad familiar que tengan una relación de afinidad o consanguinidad de primer grado con los socios que cumplen los requisitos legales para tener la condición de socio común en una cooperativa agraria y que lleven a cabo una actividad económica que dependa o sea afecta a la actividad económica de estos socios; (ii) los trabajadores de la cooperativa; y (iii) las personas jubiladas que, en sus tres últimos años de vida profesional activa, habían tenido la condición de socio común en una cooperativa agraria (artículo 2.3 LRSCC). Por su parte, los socios colaboradores son los que «*sin realizar la actividad cooperativizada principal, puedan colaborar de algún modo en la consecución del objeto social de la cooperativa*», pudiendo consistir la esta colaboración «*en la participación en actividades de carácter auxiliar, secundario, accesorio o complementario a la actividad cooperativizada principal o solo en la aportación de capital*» (artículo 26.1 LCCat). En la normativa de las secciones de crédito, se equiparan a socios colaboradores los socios comunes de las cooperativas rurales que cumplen los requisitos para ser socio común en una cooperativa de clase agraria (artículo 2.2 LRSCC).

42. Es ejemplo de ello la Ley 27/1999 que, en su artículo 5.4, establece que «*[l]as cooperativas de cualquier clase excepto las de crédito, podrán tener, si sus Estatutos lo prevén, una sección de crédito*».

43. Vid. artículos 6.3 LCCLeón y 112.3 LCCMad.

44. En el resto del Estado español, si bien es cierto que en la práctica la gran mayoría de secciones de crédito se han constituido dentro de las cooperativas agrarias, también es verdad que existen casos de secciones de crédito en cooperativas de otras clases y, por tanto, de otros sectores de actividad. Así, por ejemplo, existen secciones de crédito pertenecientes a cooperativas de consumidores y usuarios (p.ej., en Galicia), a cooperativas de transporte (p.ej., en Andalucía) o a cooperativas de trabajo asociado (p.ej., en Andalucía) [vid. Joaquín DOMINGO SANZ: *Las secciones de crédito en las cooperativas agrarias andaluzas: situación y modelos locales de integración*, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1999, pp. 35-37;

En este sentido, el artículo 6.6 LCCat dispone que «[s]olo las cooperativas de primer grado que determine la regulación específica de ámbito catalán de las secciones de crédito pueden tener estas unidades económicas y contables internas, con el objeto de cumplir alguno de los fines previstos en su régimen». Tal regulación específica es la ya citada Ley 7/2017 (LRSCC), que en su artículo 1.1 establece que son secciones de crédito «las unidades económicas y contables internas de las cooperativas de clase agraria de primer grado» que cumplan los requisitos legalmente exigidos, y en su artículo 1.2 recalca que pueden tener sección de crédito «las cooperativas rurales de primer grado que tengan como objeto, entre otros, la producción agraria».

Las secciones de crédito son una realidad extendida por todo nuestro país, aunque la mayor parte de ellas se concentran precisamente en las cuatro Comunidades Autónomas con regulación especial sobre las mismas⁴⁵. Y, concentrándonos en Cataluña, podemos señalar que, a 31 de diciembre de 2016, desde el propio sector se afirma que existen 79 cooperativas catalanas con sección de crédito, de las cuales 50 están ubicadas en la provincia de Tarragona, 27 en las comarcas de Lérida y 2 en las de Barcelona⁴⁶. Estas entidades tienen un volumen de depósitos de unos 565,7 millones de euros⁴⁷ pertenecientes a unos 44.000 impositores⁴⁸.

Vanessa CAMPOS CLIMENT y Joan Ramon SANCHIS PALACIO: «Las secciones de crédito de las cooperativas en España. Análisis de la situación actual y su papel en la financiación al cooperativismo agrario y al desarrollo rural», *Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario*, nº 9, 2005, pp. 35-52, espec. p. 45; y Amparo MELIÁN NAVARRO, Joan Ramon SANCHIS PALACIO y Francisco SOLER TORMO: «El Crédito Cooperativo como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de crisis», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 68, Agosto 2010, pp. 111-139, espec. pp. 129-130 y 132-133].

45. Por un lado, son una realidad normativa ya que, como se ha visto, la figura de la sección de crédito se ha previsto en prácticamente todas las leyes de cooperativas de nuestro país. Por otro, son una realidad empírica, puesto que existen secciones de crédito en muchas de las Comunidades Autónomas (vid. algunas referencias a su amplia existencia en MELIÁN/SANCHIS/SOLER: «El Crédito Cooperativo...», p. 130; y con datos estadísticos del año 2004 en 11 Comunidades Autónomas, CAMPOS/SANCHIS: «Las secciones de crédito...», p. 38), aunque se carece de estadísticas oficiales a nivel nacional en torno a su número exacto (vid. Ricardo SERVER IZQUIERDO y Amparo MELIÁN NAVARRO: «Análisis estratégico de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias españolas», *REVESCO*, nº 70, Enero-Abril 2000, pp. 147-164, espec. p. 150, reconociendo que «[s]u número exacto no se conoce con certeza»).

46. Datos ofrecidos por ASC, S.C.C.L., en correo electrónico enviado al autor.

47. *Ibidem*.

48. Este último dato aparece en http://www.juntspelsi.cat/actualitat/bonvehi-estamos-comprometidos-con-el-modelo-de-las-secciones-de-credito-de-las-cooperativas-y-por-este-motivo-creemos-que-se-debe-revisar-para-que-siga-siendo-util_?locale=es.

3. Regulación del Fondo cooperativo de apoyo a las secciones de crédito

3.1. Antecedentes

Ya hemos dicho que el legislador catalán ha optado por proteger los fondos depositados en las secciones de crédito de las cooperativas mediante un instrumento que ha denominado *Fondo de ayuda a las cooperativas con sección de crédito*. A continuación procederemos al análisis de los aspectos más relevantes de la configuración jurídica de este Fondo, de acuerdo con su regulación en la mencionada Ley 7/2017, de 2 de junio.

Sin embargo, antes de comenzar con dicho análisis, conviene advertir que no es la primera vez que en nuestro país se prevén mecanismos de garantía de los fondos de los socios depositados en las secciones de crédito de las cooperativas. En concreto, pueden mencionarse dos antecedentes que, sin embargo, resultaron fallidos ya que, pese a su previsión legal, en la práctica uno no llegó a constituirse y el otro desapareció al cabo de un tiempo sin haber cumplido sus objetivos.

El *primer antecedente* lo encontramos precisamente en Cataluña, donde la ahora derogada *Ley 1/1985, de 14 de enero, reguladora del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas*, preveía el *Fondo Cooperativo de Garantía de las Secciones de Crédito* y fijaba ciertas reglas en cuanto a su funcionamiento (vid. artículos 12 a 17). De su régimen jurídico destaca que:

- a) Su concreta creación y funcionamiento se remitían a un futuro decreto del Consejo Ejecutivo de la *Generalitat de Catalunya* (artículo 12.1 y 3).
- b) Debía ser financiado con aportaciones de las cooperativas que lo integraban y por aportaciones de la *Generalitat* y otros organismos públicos (artículo 12.1). Más concretamente, se dotaba, por un lado, con «*las aportaciones anuales con cargo a la cuenta de resultados de las cooperativas con sección de crédito por el importe equivalente al tanto por mil sobre los depósitos que el consejo rector determine, calculados al realizar el cierre del último ejercicio transcurrido*» y, por otro, con aportaciones anuales de la *Generalitat*, de igual cuantía al importe aportado por las cooperativas (artículo 15).
- c) Su objeto era «*asegurar los depósitos en las secciones de crédito de las cooperativas, hasta el límite establecido por el órgano superior rector*», así como también emprender, previo informe del Consejo Superior de la Cooperación, todas las actuaciones que creyera necesarias para reforzar la solvencia y mejorar el funcionamiento de las cooperativas con sección de crédito (artículo 13).

- d) Tenía como órgano superior rector un consejo formado por un número paritario de vocales representantes de las cooperativas con sección de crédito y de la Administración pública, adoptándose los acuerdos por mayoría con voto dirimente de la presidencia en caso de empate. Este miembro de la presidencia debía ser uno de los representantes de la Administración (artículo 14).
- e) Si una sección de crédito adherida al Fondo devenía insolvente, éste podía optar entre afrontar la devolución de los depósitos hasta la cantidad asegurada o, si el coste era menor, conceder las ayudas necesarias para devolver la viabilidad y la solvencia a la cooperativa (artículo 16).
- f) La materialización y la administración del Fondo se encomendaban a una institución de crédito de la Generalidad (artículo 17).

Además, en la DF 2ª de la Ley 1/1985 se autorizaba al Consejo Ejecutivo para que, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, concediera personalidad jurídica propia al Fondo. Sin embargo, el desarrollo reglamentario exigido para la efectiva creación del Fondo no se produjo y, por tanto, el Fondo no llegó a ponerse en funcionamiento⁴⁹.

Y, como *segundo antecedente*, debemos mencionar el también desaparecido *Fondo de Garantía de las Cooperativas con Sección de Crédito* previsto por la primera normativa de secciones de crédito que dictó la Comunidad Valenciana.

Así, el texto original de la *Ley 8/1985, de 31 de mayo, de regulación de la actuación financiera de las cooperativas con sección de crédito*, establecía la figura del *Consortio Valenciano de Cooperativas con Sección de Crédito* (artículos 14 a 20). En breve, podemos decir que este Consorcio: *uno*, era una entidad de derecho público con personalidad jurídica (artículo 14); *dos*, tenía como uno de sus fines

49. Vid. señalando que la creación del Fondo «*en la realidad no ha pasado de ser una buena intención o propósito*», Primitivo BORJABAD GONZALO: «La sección de crédito en la sociedad cooperativa catalana», en pp. 81-105 de *El crédito (octavas jornadas cooperativas, 1990)*, número 8 de la serie *Monografías Cooperativas*, Servicio de Publicaciones de la Asociación de Expertos Cooperativos, Lleida, 1990, p. 103; y también advirtiendo que el Fondo no llegó a constituirse, y que perdió su significado con la promulgación de la Ley 6/1998 porque esta no prevé la creación de ningún fondo con el objetivo de garantizar todo o parte del importe de los depósitos constituidos en las secciones de crédito de las cooperativas, la ya mencionada STSJ Cataluña 29 abril 2013 [ponente: María José Moseñe Gracia] (ECLI:ES:TSJCAT:2013:4917), así como también el citado Dictamen 404/09, de 19 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de la *Generalitat de Catalunya*, que evalúa la responsabilidad de la *Generalitat de Catalunya* en la insolvencia de *Copalme i Secció de Crèdit, S.C.C.L.*, por falta de ejercicio de sus potestades supervisión y control en el ámbito de las secciones de crédito de las cooperativas catalanas.

la defensa de los depósitos de las secciones de crédito (artículo 15); *tres*, para lograr este fin gestionaba del denominado «Fondo de Garantía de las Cooperativas con Sección de Crédito» [artículo 16.a)]; y *cuatro*, el legislador se ocupaba de detallar que el objeto del Fondo era «asegurar los depósitos en la Sección de Crédito de las Cooperativas hasta el límite que el Consorcio establezca» y que su dotación era financiada a partes iguales por aportaciones de las cooperativas con sección de crédito y de la *Generalitat Valenciana* (artículo 17).

El Consorcio fue desarrollado por el *Decreto 246/1993, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consorcio Valenciano de Cooperativas con Sección de Crédito*, en cuyos artículos 27 a 35 se desarrollaba el régimen económico del Fondo de Garantía⁵⁰.

Posteriormente, la *Ley 14/1997, de 26 de diciembre*, suprimió el Consorcio (artículo 15.1) pero mantuvo el Fondo de Garantía, al que se traspasaron los recursos del desaparecido Consorcio (artículo 15.2)⁵¹. Y modificó los artículos

50. Son destacables las siguientes previsiones: *primero*, la adhesión al Consorcio era voluntaria por parte de las cooperativas con sección de crédito, pero su integración suponía su automática inclusión en el Fondo de Garantía (artículo 18); *segundo*, la fijación del límite cuantitativo de la cobertura de los depósitos debía fijarse por el consejo rector del Consorcio y publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, si bien este límite no podía exceder del establecido para las cooperativas de crédito (artículos 27 y 28.1); *tercero*, ciertos depósitos quedaban excluidos de la cobertura (p.ej., los constituidos por el resto de secciones de la cooperativa o los de persona que participe en las causas motivadoras de la entrada en funcionamiento del Fondo) [artículo 28]; *cuarto*, el patrimonio del Fondo se formaba, por un lado, por las aportaciones anuales de las cooperativas (equivalentes al porcentaje de los depósitos de las secciones de crédito que determinara el consejo rector) y, por otro, por una aportación de la *Generalitat Valenciana*, igual a la efectuada por las cooperativas (artículo 29.1); *quinto*, ante la crisis de una cooperativa con sección de crédito, el consejo rector del consorcio podía adoptar diversas medidas (p.ej., conminar a la cooperativa a reconducir la deteriorada situación patrimonial, reflotar la sección de crédito adquiriendo activos no rentables o asumiendo pérdidas, gestionar su venta o traspaso a una entidad de crédito, etc.), siendo una de ellas la cobertura de las garantías hasta el límite asegurado (artículo 33); y *sexto*, la cooperativa que causaba baja del Fondo no tenía derecho a la devolución de las cantidades que había aportado [artículo 31.1.a)].

51. La doctrina ha señalado que las razones de la supresión del Consorcio Valenciano de Cooperativas con Sección de Crédito se hallan en la debilidad patrimonial de algunas de las cooperativas con sección de crédito que habían de formar parte del mismo. Y es que la adhesión al Consorcio de estas cooperativas exigía el previo examen de su situación patrimonial por parte del *Institut Valencià de Finances* (IVF), de modo que cada una de las cooperativas que formara parte de estos fondos solidarios tuviera la garantía de que las demás cooperativas integradas en el Consorcio disfrutaban de solidez suficiente. Sin embargo, las revisiones realizadas por el IVF pusieron de manifiesto importantes deficiencias patrimoniales en algunas de las cooperativas aspirantes a formar parte del Consorcio, lo que ocasionó una paralización del proceso de creación de éste y, con ello, de la creación del fondo de garantía. Este obstáculo no pudo

14 a 17 de la Ley 8/1985, que se dedicaron exclusivamente a la regulación del Fondo, en relación con su objeto (artículo 14), su órgano superior (artículo 15), su administración y gestión ordinaria (artículo 16) y su patrimonio (artículo 17)⁵². Además, la DA 5ª de la Ley 14/1997 preveía un Reglamento regulador del Fondo que, entre otros aspectos, debía regular la disposición de sus recursos para los fines señalados, la determinación del límite de cobertura de depósitos y la correlativa aportación económica al Fondo. Sin embargo, este Reglamento nunca llegó a promulgarse⁵³.

Pese a esta falta de desarrollo reglamentario, hay que advertir que se dieron notables pasos para la puesta en funcionamiento del Fondo valenciano⁵⁴. Así, en abril de 1994 su órgano rector acordó que las aportaciones anuales de las cooperativas adheridas serían equivalentes al 1,5 por mil de sus depósitos y que el límite de la cobertura del Fondo era de 1.500.000 pesetas por depositante. Y durante los años 1995 y 1996 se recibieron solicitudes de adhesión al Fondo de aproximadamente una cuarta parte de las cooperativas con sección de crédito existentes por aquel entonces en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, algunas

ser superado y terminó provocando a finales de 1997, la supresión del Consorcio y que fuera el propio IVF quien asumiera la administración y gestión, así como la materialización, del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cooperativas con Sección de Crédito (vid. Francisco V. SOLER TORMO: «Las peculiaridades de las secciones de crédito de las cooperativas. Sus repercusiones en el caso valenciano», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 32, Agosto 1999, pp. 115-155, espec. pp. 124-125).

52. De estas normas destacamos las tres siguientes. En *primer* lugar, que la administración, gestión ordinaria y materialización del Fondo era encomendado al IVF (artículo 16.1). En *segundo* término, que el órgano rector del Fondo (el Consejo) estaba constituido por un número paritario de vocales representantes de las cooperativas adheridas y de la Administración de la *Generalitat Valenciana* (artículo 15.1). Y, *en fin*, que el Fondo se dotaba con recursos de distinta procedencia, a saber: [a] los existentes en el Fondo a la entrada en vigor de la Ley; [b] las aportaciones anuales de las cooperativas adheridas al Fondo; [c] las consignaciones previstas en los Presupuestos de la Generalitat, hasta la cantidad aportada por las cooperativas; [d] las rentas y productos que generen sus bienes y valores; y [e] las retribuciones procedentes de los servicios que pudiera realizar.

53. No obstante, parece que, en lo compatible, debían seguir aplicándose las normas sobre régimen económico del Fondo previstas en el mencionado *Decreto 246/1993, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consorcio Valenciano de Cooperativas con Sección de Crédito*.

54. Vid. para lo que sigue, Vicente SALINAS LA CASTA: «Las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas valencianas», *Revista Valenciana d'Estudis Autònomic*, nº 37, 2001, pp. 71-96, espec. pp. 86-87.

deficiencias graves en su regulación⁵⁵, junto con la decisión de la *Generalitat Valenciana* de crear un Plan de Racionalización de Crédito Cooperativo dirigida a liquidar las entidades inviables utilizando directamente los Presupuestos de la *Generalitat* y prescindiendo del Fondo⁵⁶, llevaron a paralizar la efectiva implementación de éste.

En fin, la *Ley 16/2003, de 17 de diciembre*, suprime el Fondo, estableciendo su liquidación por el *Institut Valencià de Finances* (artículo 62.1) y fijando el destino del haber líquido resultante, que se distribuye entre el patrimonio de la *Generalitat Valenciana* y las cooperativas adheridas, en la misma proporción que las aportaciones realizadas al patrimonio del Fondo (artículo 62.1).

Ahora, el legislador catalán, primero mediante el Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo, y luego en la vigente Ley 7/2017, recupera la iniciativa de crear un Fondo para que las cooperativas con dificultades puedan devolver las cantidades depositadas en su sección de crédito⁵⁷. La idea de crear de un Fondo de estas características surge ya en el año 2011⁵⁸ y se recoge posteriormente en el objetivo estratégico 2.4 del *Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català (document de reflexió estratègica: visió 2020)*, de mayo de 2015⁵⁹, pero sin duda se ha visto

55. SALINAS LA CASTA: «Las secciones de crédito...», p. 87, pone de manifiesto que el artículo 27 del Reglamento Orgánico del Consorcio Valenciano de Cooperativas con Sección de Crédito limitaba la cobertura del Fondo a los depósitos de los socios de las cooperativas adheridas, de modo que los correspondientes a no socios no se encontraban asegurados, y que por esta razón quedó suspendida en la práctica la adhesión de entidades.

56. *Orden de 14 de marzo de 1995, de la Conselleria de Economia y Hacienda, por la que se establece el Plan de Racionalización del Sector del Crédito Cooperativo.*

57. Antes de la creación de este Fondo, las cooperativas con sección de crédito con dificultades para devolver los depósitos podían solicitar ayuda a la *Generalitat de Catalunya*, que tenía habilitada una línea de avales para que aquellas cooperativas pudieran obtener financiación para hacer frente a la liquidación de los saldos acreedores de la sección de crédito (vid. el segundo párrafo del Preámbulo del Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo).

58. Así lo reconoce el Sr. Lluís ROIG, presidente de la ASC, S.C.C.L., en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del *Parlament de Catalunya* (vid. *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, XI Legislatura, tercer periodo, serie C, número 229, Comisión de Economía y Hacienda, Sesión 10, miércoles 26 de octubre de 2016, p. 44); y también lo menciona el diputado socialista Sr. Òscar ORDEIG MOLIST en el debate de validación del Decreto Ley 2/2016 (vid. DSPC, 9 junio 2016, p. 30).

59. El documento está disponible en <http://www.cooperativesagraries.cat/ca/descarrega-de-documents.html>. En concreto, el objetivo estratégico 2.4 se encuentra en la p. 19 e incluye «analizar la viabilidad de la creación de un fondo de contingencia o de un contrato de seguro para garantizar los ahorros de los impositores de las secciones de crédito» (en catalán en el original).

notablemente acelerada a raíz de los problemas de la sección de crédito de la cooperativa de *Cambriels* de finales del año 2015. Con todo, como se verá, este nuevo Fondo funciona de forma sustancialmente distinta de los precedentes ya que no se prevé que su patrimonio sirva para restituir directamente los depósitos de los clientes de las secciones de crédito, sino para permitir que la cooperativa obtenga prestado el dinero que después utilizará para devolver esos depósitos.

3.2. Finalidad del Fondo

El artículo 24.1 LRSCC establece que la finalidad del Fondo «*es dar estabilidad y sostenibilidad al conjunto de las cooperativas con sección de crédito*». Idea ésta que ya aparece en el párrafo séptimo del Preámbulo de la norma cuando señala que el FSC «*se crea con el fin de dar estabilidad al sector*»⁶⁰. Por tanto, el Fondo está concebido principalmente para evitar que la crisis de una cooperativa con sección de crédito afecte o contagie a las demás; esto es, trata de prevenir que la imposibilidad de devolver los depósitos de una sección de crédito provoque una falta de confianza tal de los impositores de las demás que tenga como resultado que comiencen a retirar masivamente sus fondos y, de este modo, provoquen a su vez la crisis de esas otras secciones⁶¹. Desde esta perspectiva, el Fondo es una herramienta de carácter sistémico porque beneficia a todo el sector cooperativo.

Para conseguir esta finalidad, el Fondo se constituye como instrumento de apoyo financiero para que las cooperativas puedan devolver las cantidades que han sido depositadas en su sección de crédito. En este sentido, el artículo 24.4 LRSCC dispone que el Fondo «*tiene por objeto contribuir a devolver a sus titulares*

60. Este fin ya era mencionado en el párrafo séptimo del Preámbulo del Decreto Ley 2/2016 y también en su validación parlamentaria se pone especial énfasis en su «*carácter sistémico respecto al conjunto del sector*» (vid. DSPC 9 junio 2016, p. 26), en que la falta de liquidez que impide la devolución de los depósitos de una sección de crédito genera «*riesgo de contagio en el resto del sector*» (vid. DSPC 9 junio 2016, p. 27) [frases ambas pronunciadas por el Vicepresidente y *Conseller* de Economía y Hacienda, Sr. Oriol JUNQUERAS VIES] o en que el Fondo «*también se crea para evitar el riesgo de contagio cuando una sección de crédito no marcha bien (...)*» (vid. DSPC 9 junio 2016, p. 37; intervención del Sr. David BONVEHÍ TORRAS, del Grupo Parlamentario de *Junts pel Sí*) [las citas están en catalán en el original].

61. Vid. sobre el riesgo de que la crisis económica de una sección de crédito arrastre a otras, SERVER/MELIÁN: «Análisis estratégico...», p. 159; SALINAS LA CASTA: «Las secciones de crédito...», p. 88; o SOLER TORMO: «Las peculiaridades de las secciones de crédito...», pp. 131-132.

los fondos constituidos como saldos acreedores, siempre que los socios hayan acordado la baja de la sección de crédito correspondiente antes de recibir una actuación de apoyo financiero»⁶². Pese a que el legislador no lo especifica, parece evidente que la contribución del Fondo solo se producirá en caso de insolvencia o falta de liquidez de la cooperativa, de modo que ésta no pueda hacer frente a la restitución de los depósitos con sus propios recursos. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que el FSC actúa como fondo de garantía de los depósitos de la sección de crédito de la cooperativa agraria. Sin embargo, como se verá más adelante, esta garantía opera de forma «indirecta» ya que el primer beneficiario del apoyo financiero es la propia cooperativa y no los depositantes de la sección de crédito.

Por otro lado, una premisa que se considera básica para el cumplimiento de aquella finalidad es la preservación de la existencia de la cooperativa agraria viable ante una crisis de liquidez, o incluso de solvencia, que impida la devolución de los depósitos de la sección de crédito⁶³. En otros términos, se quiere evitar que la mera imposibilidad de hacer frente a la devolución de los depósitos de la sección de crédito arrastre a una cooperativa que sea viable a la desaparición. A nuestro juicio, esta premisa puede apreciarse claramente en las siguientes dos reglas.

62. Vid. también, el párrafo séptimo del Preámbulo de la Ley, que afirma que el FSC es un «instrumento (...) que contribuy[e] al retorno de los saldos acreedores de las secciones de crédito a los socios titulares, dotando de tiempo a la cooperativa en reestructuración para poder realizar de forma ordenada los activos de la sección de crédito». Y, más adelante, el décimo párrafo del mismo Preámbulo sostiene que el FSC pretende «profundizar en la preservación de los saldos acreedores de las secciones de crédito y, por tanto, en los intereses de sus usuarios». Esta función de Fondo también se hace evidente en muchas de las intervenciones que se produjeron durante la tramitación parlamentaria: vid. p.ej., DSPC 9 junio 2016, p. 27 (intervención del Vicepresidente y *Conseller* de Economía y Hacienda, Sr. Oriol JUNQUERAS VIES), p. 30 (intervención del Sr. Òscar ORDEIG MOLIST, del Grupo Parlamentario Socialista), p. 35 (intervención de la Sra. Mireia VEHÍ CANTENYS, del Grupo Parlamentario de la *Candidatura d'Unitat Popular*) o p. 36 (intervención del Sr. David BONVEHÍ TORRAS, del Grupo Parlamentario de *Junts pel Sí*).

63. En este sentido, el Preámbulo de la Ley 7/2017 precisa que el FSC pretende «hacer sostenible la actividad productiva futura de la cooperativa» (párrafo séptimo) y en el trámite parlamentario pueden leerse frases como «el hecho de no compasar la exigibilidad de los saldos acreedores de la sección de crédito al ritmo de la liquidación ordenada de sus activos puede generar riesgo de eventuales insuficiencias de liquidez para afrontar con éxito la liquidación y puede poner en riesgo la viabilidad de la cooperativa» (pronunciada por el *conseller* de Economía y Hacienda, Sr. Oriol JUNQUERAS VIES: vid. DSPC 9 junio 2016, pp. 26-27) o como «hay que garantizar los ahorros de los socios, pero también hay que garantizar la continuidad de nuestras cooperativas» (del diputado Sr. Óscar ORDEIG MOLIST: vid. *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, XI Legislatura, cuarto periodo, serie P, número 65, Pleno del Parlamento, Sesión 35, miércoles 27 de mayo de 2017, p. 58).

Por un lado, cuando se condiciona el apoyo financiero del FSC a una doble condición: que la cooperativa haya acordado la baja de la sección de crédito (artículo 24.4 LRSCC)⁶⁴ y que la cooperativa con sección de crédito receptora aporte «*un plan de viabilidad económica y financiera futura*» que, además, debe ser evaluado por un experto independiente [artículo 34.1.a) LRSCC]. Es decir, que para recibir apoyo del FSC la cooperativa agraria debe poder continuar con su actividad si bien, como parece lógico, no podrá mantener la sección de crédito.

Por otro, en el hecho ya mencionado de que el beneficiario directo o inmediato de las medidas del FSC sea la propia cooperativa con sección de crédito, en tanto que los titulares de los depósitos son solo beneficiarios indirectos o mediatos. En otros términos, es la cooperativa la que recibe las ayudas del FSC (p.ej., en forma de financiación) y es la cooperativa la que se encargará de aplicar estas ayudas a la devolución de los depósitos y otros pasivos de la sección de crédito (p.ej., utilizando la financiación concedida para dicha devolución). En ello se diferencia del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, por cuanto en éste el pago de las cantidades, hasta el límite cuantitativo previsto, se realiza directamente a los titulares de los depósitos garantizados (cfr. artículos 8 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, y 8 y 9 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito).

3.3. Administración del Fondo

La norma catalana que estamos analizando establece que el Fondo no tiene personalidad jurídica (artículo 24.5 LRSCC) y que es administrado por una cooperativa de segundo grado (artículo 27.1 LRSCC). Esta previsión se complementa con las siguientes cinco reglas.

En *primer* lugar, esta cooperativa de segundo grado que administre el Fondo debe cumplir un triple requisito. El *primero* es que incluya en su objeto social estatutario la actividad de «*facilitar a las cooperativas socias una organización común en materia de secciones de crédito*» [artículo 27.3.a) LRSCC]. El *segundo* requisito

64. Puesto que la existencia de las secciones debe constar en los estatutos de la cooperativa (artículo 6.1 LCCat), su supresión constituirá una modificación estatutaria que, por tanto, deberá ser acordada por la asamblea general [artículo 43.2.g) LCCat] con el voto favorable de las dos terceras partes del número de votos sociales de los asistentes (artículo 47.2 LCCat).

es que los estatutos de aquella cooperativa incluyan una cláusula que le permita «actuar en nombre y por cuenta de las cooperativas socias en las negociaciones jurídicas y económicas con otras entidades» [artículo 27.3.b) LRSCC]. Y, en fin, el tercer requisito es que, en tal cooperativa de segundo grado, las cooperativas socias «deben representar la mayoría de los saldos acreedores constituidos en las secciones de crédito de las cooperativas con relación a otras cooperativas de segundo grado similares» (artículo 27.4 LRSCC).

En segundo término, aquella cooperativa de segundo grado administradora es designada por acuerdo del Gobierno de la *Generalitat de Catalunya*, a propuesta del consejero titular del departamento competente en materia de economía y finanzas⁶⁵. La designación ha de publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC) [artículo 27.2 LRSCC].

Y, en concreto, esta designación ha recaído sobre ASC, S.C.C.L., que es una cooperativa de segundo grado vinculada a la *Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya* (FCAC)⁶⁶. De hecho, los tres requisitos que hemos visto anteriormente que debía cumplir la cooperativa de segundo grado administradora del fondo se han diseñado *ad hoc* para encomendar su gestión a dicha entidad. Y, en este sentido, el propio acuerdo de nombramiento reconoce que, en la actualidad, la cooperativa nombrada es la única que cumple los requisitos para ser la cooperativa administradora del fondo⁶⁷.

65. En la actualidad, el Departamento competente es el *Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda* de la *Generalitat de Catalunya* (vid. artículo 3.2 del *Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración* de la *Generalitat de Catalunya*, así como el *Decreto 33/2016, de 19 de enero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda*).

66. Vid. *Acord GOV/63/2016, de 17 de mayo, por el cual se designa la cooperativa administradora del Fondo cooperativo de ayuda a las secciones de crédito* (DOGC nº 7124, de 20 de mayo de 2016). ASC, S.C.C.L., es una cooperativa de segundo grado que se constituye en Barcelona el 1 de junio de 1998, y que está inscrita en el Registro Central de Cooperativas de Cataluña con el número 10.799. La entidad es sucesora de la *Associació de Seccions de Crèdit* (de donde derivan las siglas ASC), que se constituyó en el año 1988 en el seno de la *Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya* (FCAC), con el objetivo de hacerse cargo de la gestión diaria de los temas específicos de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias catalanas. Vid. para un panorama general de esta entidad, Josep PARCERISA: «ASC, SCCL una cooperativa de segundo grado que presta sus servicios a las secciones de crédito de las cooperativas agrarias de Cataluña», *Noticias de la economía pública, social y cooperativa*, nº 52, Enero-Junio 2009, pp. 65-72, así como la información, no siempre actualizada, que contiene la página web www.cooperativesagraries.cat/ca/seccions-de-credit.html y www.coopcredit.coop/informacio.asp?idioma=2.

67. Una de las críticas que durante la tramitación parlamentaria de la norma se formularon por las cooperativas con sección de crédito contrarias al Fondo fue que no habían sido consultadas ni habían podido

En *tercer* lugar, el órgano rector del Fondo es el consejo rector de la cooperativa (de segundo grado) administradora (artículo 28.1 LRSSC)⁶⁸.

Esta previsión, lejos de ser superflua, permite realizar dos relevantes afirmaciones. Por un lado, que la adopción de decisiones sobre el Fondo corresponde al consejo rector de la cooperativa administradora y no a su asamblea general. Por otro, que la cooperativa administradora no puede crear un órgano de gobierno específico para regir el Fondo.

En *cuarto* término, la gestión del Fondo es remunerada ya que, de acuerdo con el artículo 35.2 y 3 LRSCC, la cooperativa administradora «*debe aplicar al propio Fondo una comisión de gestión anual, que debe ser acordada en el consejo rector*» pero que «*no puede ser superior al 0,5% de la totalidad del Fondo*». En relación con esta previsión queremos ahora efectuar dos precisiones. De una parte, y pese a que el precepto parece configurar la retribución como imperativa (la cooperativa administradora «*debe aplicar*» una comisión), no vemos inconveniente en que esta cooperativa opte por no percibir retribución alguna⁶⁹. De otra, creemos que el momento en que ha de calcularse el porcentaje máximo del 0,5% de la totalidad del Fondo es el 31 de diciembre de cada año, ya que es la fecha que sirve también para determinar las aportaciones que debe realizar cada una de las cooperativas adheridas al Fondo.

participar en esta designación de su entidad gestora (vid. en particular la comparecencia del representante de la *Associació AntiFons Obligatori* en la Comisión de Economía y Hacienda del *Parlament de Catalunya*, en DSPC 26 octubre 2016, p. 30). Aunque es cierto que esta falta de intervención de los principales afectados por la medida parece contraria a los principios democrático y participativo que caracterizan al movimiento cooperativo, también es verdad que la elección de ASC, S.C.C.L. era la opción más lógica a la vista de su amplia representatividad de las cooperativas catalanas con sección de crédito.

68. El consejo rector de ASC, S.C.C.L., consta de ocho miembros, existiendo los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Todos los miembros son cooperativas con sección de crédito, que actúan a través de sus correspondientes representantes en el consejo. Además, ASC, S.C.C.L., tiene designados a dos interventores de cuentas. La composición del consejo rector y de los interventores puede consultarse en <https://www.coopcredit.coop/informacio.asp?opcion=4&idioma=2>.

69. En este sentido, el Presidente de ASC, S.C.C.L., en comparecencia parlamentaria, manifestó que «*[p]or lo que respecta a la comisión de gestión del Fondo, es voluntad de la Asociación imputar los gastos originados por el análisis de operaciones a la cooperativa interesada y, por tanto, no fijar ninguna comisión de gestión*» (vid. DSPC 26 octubre 2016, p. 26; en catalán en el original).

Por *último*, se establecen tres reglas en torno a la adopción de acuerdos relativos al Fondo⁷⁰. La *primera* es que los acuerdos sobre el Fondo se tienen que adoptar por mayoría de los miembros del consejo rector, presentes o representados, teniendo la presidencia del consejo rector voto dirimente en caso de empate (artículo 28.3 y 4 LRSCC)⁷¹. La *segunda* es que si el acuerdo que debe adoptarse se refiere a actuaciones de apoyo financiero del Fondo, será necesario que previamente se obtenga un informe –no vinculante– del departamento competente de la *Generalitat de Catalunya* en materia de economía y finanzas (artículo 28.2 LRSCC). Y la *tercera* regla es que, en ocasiones, el acuerdo del consejo rector ha de adoptarse sobre la base de la propuesta que realice la denominada comisión delegada.

En efecto, la normativa catalana exige que la cooperativa administradora del Fondo nombre una comisión delegada (artículo 29.1 LRSCC) y fija sus funciones, principios de actuación y composición⁷².

Así, por lo que respecta a sus *funciones*, la comisión delegada es «*la encargada de proponer las operaciones de financiación y las demás actuaciones de apoyo y las de gestión de la liquidez objeto del Fondo*» si bien «*de acuerdo con los criterios estable-*

70. Pese al indudable interés público que subyace en la creación del Fondo, estos acuerdos del consejo rector serán impugnados ante la jurisdicción civil y no ante los tribunales contencioso-administrativos. En concreto, quedan sometidos al régimen general de impugnación de acuerdos del consejo rector de las cooperativas previsto en el artículo 61 LCCat y, por tanto, el conocimiento de la acción de impugnación queda atribuido a los Juzgados Mercantiles del domicilio social de la cooperativa administradora [artículos 86.ter.2.a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder Judicial, y 52.1.10º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil].

71. La previsión de adopción de acuerdos «*por mayoría de los miembros del consejo rector*» de la Ley 7/2017 ha sustituido la muy imprecisa «*mayoría de los asistentes*» que contenía el Decreto Ley 2/2016, y que podía llevar a cierta confusión dado que en las reuniones del consejo rector pueden estar presentes, de forma puntual, ciertas personas que no son miembros del mismo. En la normativa catalana, esta posibilidad deriva de los artículos 55.2.c) y 57.1 LCCat cuando establecen que los estatutos sociales han de regular el funcionamiento interno del consejo rector. Vid. en torno a esta posibilidad, aunque refiriéndose a la normativa estatal, Francisco VICENT CHULIÁ: «(sub) artículo 58», en *Ley General de Cooperativas*, Vol. 2º del Tomo XX de los *Comentarios al Código de Comercio y legislación mercantil especial* (dir.: F. Sánchez Calero y M. Albaladejo), EDESA, Madrid, 1990, pp. 732-733.

72. Es de interés señalar que la comisión delegada no venía prevista en el Decreto ley 2/2016 y fue introducida durante la tramitación parlamentaria que acabaría dando lugar a la Ley 7/2017. La creación de esta comisión fue sustancialmente el resultado de acoger la enmienda número 5, del GP *Catalunya Sí que es Pot*, y la enmienda número 5 del GP del *Partit Popular de Catalunya* (vid. respectivamente, *Bulletí Oficial del Parlament de Catalunya*, XI Legislatura, tercer periodo, número 278, lunes 5 de diciembre de 2016, pp. 24 y 45).

cidos y aprobados por el consejo rector» (artículo 29.1 LRSCC). De este precepto podemos extraer tres ideas esenciales.

La *primera* es que no tiene facultades decisorias sino solamente de elevar propuestas al consejo rector, que no quedará vinculado por la opción u opciones planteadas por la comisión.

La *segunda* idea es que la comisión tiene legalmente atribuidos dos ámbitos en que formular propuestas: por un lado, cuando haya que adoptar una medida de apoyo financiero a una cooperativa con sección de crédito; por otro, a la hora de decidir cómo se gestiona la liquidez del Fondo. Es evidente que, en ambos casos, las propuestas de la comisión habrán de seguir las directrices legales al respecto (cfr. p.ej., artículos 34 y 35.1 LRSCC, sobre criterios que deben seguir las actuaciones de apoyo financiero y parámetros que rigen la parte del Fondo no aplicada a este apoyo, respectivamente). Por otro lado, aunque el consejo rector pueda apartarse de las propuestas formuladas por la comisión, ello no le exime de obtenerlas. Es decir, que, salvo en supuestos excepcionales, antes de tomar una decisión de apoyo financiero o de gestión de la liquidez del Fondo, el consejo rector deberá dirigirse a la comisión para que formule una propuesta⁷³. En fin, a nuestro juicio nada impide que, por medio de las normas internas que regulan el funcionamiento de la comisión delegada, sus facultades de propuesta se extiendan a otros ámbitos (p.ej., en relación con la comisión de gestión anual, a la prórroga para actualizar la aportación al Fondo, etc.). En este sentido, pensamos incluso que el consejo rector podrá solicitar la opinión de la comisión siempre que lo considere oportuno, incluso cuando esta posibilidad no haya sido prevista legalmente ni contemplada por las normas autorreguladoras de la cooperativa administradora.

Y la *tercera* idea es que las propuestas que formule la comisión delegada no solo deberán seguir las directrices legales sin que, además, habrán de ceñirse a los criterios establecidos y aprobados por el consejo rector.

En cuanto los *principios de actuación* de la comisión delegada, el legislador establece que debe comportarse con diligencia, lealtad e imparcialidad, y que ha de defender los intereses de todas las cooperativas con sección de crédito y sus respectivos socios (artículo 29.2 LRSCC).

73. Una posible excepción serían aquellos casos en que la urgencia de la actuación de apoyo financiero hiciera inconveniente o imposible esperar a la propuesta de la comisión delegada.

Y en relación con la *composición* de la comisión delegada, está integrada por diez miembros de pleno derecho (artículo 30 LRSCC), que se nombran como sigue:

- a) El presidente del consejo rector de la cooperativa administradora del Fondo (miembro nato que actúa a su vez como presidente de la comisión).
- b) Dos técnicos de la cooperativa administradora, que son designados por el consejo rector de esta cooperativa.
- c) Dos técnicos que no pertenezcan a la cooperativa administradora y que son designados por la asamblea general de ésta.
- d) Cinco representantes de las cooperativas con sección de crédito, designados por la asamblea general de la cooperativa administradora. En la elección de estos miembros debe garantizarse que queden representadas la pluralidad territorial y sectorial y la diversidad de dimensiones y de saldos acreedores.

A estos diez miembros de pleno derecho se suma un decimoprimer que asiste con voz pero sin voto a las reuniones de la comisión delegada. Se trata de un experto independiente designado por el departamento de la *Generalitat de Catalunya* competente en materia de economía y finanzas (artículo 30.2 LRSCC). Su designación por la Administración catalana ha de ponerse en relación con la función supervisora que la *Generalitat de Catalunya* tiene sobre las secciones de crédito (artículo 16 LRSCC) y, más en concreto, con la facultad de pedir la información relativa al Fondo que sea necesaria para el cumplimiento de aquella función (artículo 37.1 LRSCC). Por su parte, el carácter de experto independiente del sujeto designado permite aportar a la comisión delegada una visión no solo profesional y técnica sino también externa a los intereses de la cooperativa administradora del Fondo y de las cooperativas con sección de crédito que la integran.

3.4. Obligación de pertenencia al Fondo

Las cooperativas catalanas con sección de crédito están obligadas a pertenecer al Fondo. Así lo exige, claramente, el artículo 25.1 LRSCC cuando dispone que «[t]odas las cooperativas con sección de crédito sujetas a las prescripciones de la presente Ley están obligadas a constituir y participar en el Fondo cooperativo de apoyo a las secciones de crédito».

Ya hemos dicho que en la configuración actual del sistema la entidad administradora del Fondo es ASC, S.C.C.L., y su órgano rector es el consejo rector de esta cooperativa de segundo grado. Igualmente, hay que recordar que esta cooperativa es una entidad privada donde la integración es voluntaria, y que no todas las cooperativas catalanas con sección de crédito son socios de ASC, S.C.C.L.⁷⁴. La cuestión que se plantea entonces es si para pertenecer al Fondo hay que ser socio de esta entidad. A nuestro juicio, la respuesta es negativa. Es decir, somos de la opinión que la obligatoria pertenencia al Fondo no exige convertirse en socio de la cooperativa de segundo grado que lo administra. Esta afirmación deriva, por un lado, del hecho de que el legislador se refiere siempre a la pertenencia al Fondo, y en ningún caso a la cooperativa administradora [cfr. p.ej., artículos 18.2.i), 24.2 o 25.2 LRSCC]. Y, por otro lado, evita los problemas que suscita que la integración en una entidad privada sea obligatoria, desde la perspectiva de los principios constitucionales que reconocen el libre derecho de asociación (artículo 22 CE) y la libertad de empresa (artículo 38 CE)⁷⁵.

Por tanto, la cooperativa con sección de crédito que no sea socio de ASC, S.C.C.L. podrá optar, bien por solicitar su ingreso como socio con el fin de hacer efectiva su pertenencia al Fondo, o bien por suscribir solo un contrato de adhesión al Fondo sin pedir la admisión como socio de la cooperativa de segundo grado. En este último caso, y pese a no ser socio, es claro que vendrá obligado a cumplir las decisiones del consejo rector de ASC, S.C.C.L. por lo que respecta a la gestión del Fondo. Del mismo modo, hay que entender que la pérdida de la condición de socio de la ASC, S.C.C.L. no comporta la automática exclusión del Fondo, al que la cooperativa con sección de crédito seguirá perteneciendo pese a su baja como socio de la cooperativa de segundo grado que lo administra. Como

74. Como hemos dicho antes, a 31 de diciembre de 2016, 71 de las 79 cooperativas agrarias catalanas que tienen sección de crédito pertenecen a ASC, S.C.C.L. Precisamente, en una de las crisis más importantes de una cooperativa con sección de crédito en Cataluña, la de *Cooperativa Agrícola Catalana de l'Aldea*, S.C.C.L., ésta no formaba parte de la ASC, S.C.C.L. Vid. la entrevista que se realiza a Lluís ROIG, Presidente de la ASC, S.C.C.L., en el Suplemento Semanal de Economía y Negocios del *Diari de Tarragona*, domingo 5 de junio de 2016, p. 7, en la que recalca que «[e]n el caso de L'Aldea puedo decir que la sección de crédito no estaba dada de alta y no teníamos datos sobre su actuación» (<http://www.diaridetarragona.com/uploads/4657553b62341cb.pdf>).

75. Vid. en torno a tales problemas, entre los últimos, Francisco VICENT CHULIÁ: «Impacto de la Constitución en el derecho de sociedades», en pp. 339-354 de *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013.

es evidente, también en este caso la cooperativa que ha causado baja seguirá estando obligada a cumplir los acuerdos que, respecto del Fondo, tome el consejo rector de ASC, S.C.C.L.

La no pertenencia de la sección de crédito al Fondo se considera infracción muy grave [artículo 18.2.i) LRSCC] que se sanciona en todo caso con la baja de la sección de crédito en el Registro general de cooperativas de Cataluña (artículo 19.2 *in fine* LRSCC). Es decir, que la imposición de esta sanción resulta obligada si se constata que la sección de crédito no pertenece al Fondo. La baja registral comporta el inicio del proceso de liquidación de la sección de crédito, y su final desaparición, sin que ello afecte a la existencia de la cooperativa agraria. De hecho, uno de los principios que rigen la liquidación de la sección de crédito es «[l]a *continuidad de la actividad agraria de la cooperativa*» [artículo 19.8.c) LRSCC]⁷⁶.

Además de la baja registral de la sección de crédito, la falta de pertenencia del Fondo también será sancionada con multa de entre 3.001 y 40.000 euros, en función de si se impone en grado mínimo, medio o máximo (artículo 19.2 LRSCC). Dentro de esta horquilla, el grado en que se impone la sanción y su concreta cuantía depende de un conjunto de factores señalados en el artículo 19.1 LRSCC⁷⁷.

Sin embargo, la sanción económica puede ser suspendida si la cooperativa incumplidora presenta un plan para devolver a sus titulares los saldos acreedores de la sección de crédito con su baja registral. Y el efectivo cumplimiento de este plan, sin perjuicio económico para la cooperativa ni para los mencionados titu-

76. En este proceso de liquidación derivado de la baja registral de la sección de crédito hay que tener en cuenta tres reglas (vid. artículo 19.8 LRSCC). En *primer* lugar, que las facultades de los órganos de gobierno y dirección de la cooperativa quedan suspendidas en relación con la gestión y disposición de la sección de crédito. En *segundo* término, que tal proceso de liquidación debe ser gestionado por una persona de reconocido prestigio en el ámbito financiero, que es nombrada por el consejero del departamento competente en materia de economía y finanzas de la *Generalitat de Catalunya*. Y, en *tercer* lugar, que la actuación de esta persona queda sometida a tres principios: *uno*, la salvaguardia de la cuantía máxima de los saldos acreedores depositados en la sección de crédito; *dos*, la continuidad de la actividad agraria de la cooperativa; y *tres*, la depuración de las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir el director general o gerente de la sección de crédito, y cada uno de los interventores de cuentas y de los miembros del consejo rector de la cooperativa por una conducta dolosa o negligente.

77. En concreto, la sanción se determina «*en función de la existencia de intencionalidad o de reiteración, de la naturaleza de los perjuicios causados, de las consecuencias económicas y sociales que produzcan, del número de socios de la cooperativa, de la dimensión económica de los hechos, del volumen de operaciones de la cooperativa y de la sección de crédito y de la reincidencia por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, si ha sido declarado así por resolución firme*» (artículo 19.1 LRSCC).

lares, «*determina, en su caso, la remisión de las sanciones administrativas que hubieran correspondido a los responsables*» (artículo 19.5 LRSCC). El legislador no precisa en qué plazo debe presentarse dicho plan ni quién verifica su contenido y controla su cumplimiento, si bien parece lógico atribuir estas facultades a la propia Administración pública sancionadora.

3.5. Aportaciones al Fondo

El deber de las cooperativas catalanas con sección de crédito de pertenecer al Fondo se complementa, primero, con el deber inicial de aportar ciertas cantidades al mismo [*infra* apartado A)] y, segundo, con el deber de mantener el nivel de las aportaciones mientras exista la sección de crédito [*infra* apartado B)]. El incumplimiento de estas obligaciones se sanciona con dureza [*infra* apartado C)] No obstante, las aportaciones de tales cooperativas no son las únicas dotaciones del Fondo [*infra* apartado D)]. En fin, la desaparición de la sección de crédito, con la consiguiente baja del Fondo, comporta el derecho de la cooperativa a la devolución de las aportaciones mantenidas en el Fondo [*infra* apartado E)].

A) Deber inicial de aportación

La regla general es que las cooperativas catalanas con sección de crédito han de contribuir al Fondo con «[a]portaciones no integrables a capital (...) por un importe en euros del 3% sobre los saldos acreedores medios mensuales de cada sección de crédito» (artículo 32.1 LRSCC). Sin embargo, el porcentaje se incrementa en un 0,5% cuando la parte del Fondo no aplicada a las actuaciones de apoyo financiero represente una cuantía inferior al 20% de su patrimonio (artículo 32.2 LRSCC). Esta regla merece diversas consideraciones.

La *primera* es que estos porcentajes de aportación ya eran los previstos en el inicial Decreto Ley 2/2016⁷⁸. Esta norma también preveía que la aportación inicial al Fondo debía realizarse antes del 1 de junio de 2016, fecha en que se preveía que fuera operativo. No obstante, y como ya se ha dicho, la configura-

78. La única diferencia en el Decreto Ley era que la aportación general debía ser «*como mínimo*» de un 3%, sin que quedara muy claro si este porcentaje podía incrementarse más allá del 0,5% también previsto, y, en caso afirmativo, quién tenía la potestad de aumentarlo, en qué casos y hasta qué cuantía.

ción inicial del Fondo en dicho Decreto Ley generó un profundo rechazo en algunas de las cooperativas catalanas con sección de crédito. En concreto, 26 de ellas unieron sus esfuerzos mediante la creación de una asociación denominada «*Plataforma Antifons Obligatori*» y se negaron al principio a hacer la contribución al Fondo que les correspondía⁷⁹. Sin embargo, los cambios introducidos en la configuración del Fondo durante la tramitación de la Ley 7/2017 y, sobre todo, los requerimientos que la *Generalitat* dirigió a tales cooperativas advirtiéndoles de la baja de la sección de crédito si no participaban en el Fondo, les hicieron reconsiderar su postura de modo que, en la actualidad, todas las cooperativas con sección de crédito han hecho la correspondiente aportación al Fondo.

La *segunda* consideración es que las aportaciones han de ser «*no integrables a capital*», esto es, que pese a ser realizadas por los socios de la cooperativa de segundo grado administradora del Fondo, no formarán parte del capital social de ésta ni, consiguientemente, quedarán sujetos al régimen jurídico de este último. Tales aportaciones constituirán un patrimonio separado con autonomía de gestión dentro del patrimonio de la cooperativa administradora (artículo 31.1 LRSCC) y, por tanto, deberán llevarse a una reserva especial *ad hoc* que deberá estar claramente diferenciada del resto de reservas, obligatorias y voluntarias, de la cooperativa administradora.

Una *tercera* consideración es que el legislador dispone que el cálculo de las cantidades a aportar se efectúe el 31 de diciembre de cada año basándose en los importes de cierre de cada mes del año natural, redondeado por exceso al millar más próximo (artículo 32.3 LRSCC). Esta norma ya aparecía en el Decreto Ley 2/2016, por lo que, al menos para las cooperativas que hicieron la aportación en plazo, la fecha de referencia para el cálculo de la primera aportación fue el 31 de diciembre de 2015. Esto es: estas cooperativas con sección de crédito debieron tomar el saldo acreedor de fin de cada mes de este año 2015, realizar la media y redondearla por exceso al millar más próximo⁸⁰.

79. Esta asociación incluso creó una página de *facebook* con el fin de dar a conocer su opinión y actividad. Vid. <https://www.facebook.com/Plataforma-anti-fons-obligatori-1712690192334204/>.

80. Es evidente que aquellas cooperativas renuentes a realizar su aportación al Fondo y que terminaron haciendo su aportación en los primeros meses del año 2017, debieron tomar el 31 de diciembre de 2016 como fecha de referencia para el cálculo de la primera aportación.

Un ejemplo ayudará a aclarar cómo debía aplicarse la fórmula de cálculo de la primera aportación.

1. Supongamos que los saldos acreedores de cierre de cada mes del año 2015 en la sección de crédito han sido (en euros):

Enero 2015	1.654.362	Julio 2015	1.976.987
Febrero 2015	1.784.120	Agosto 2015	1.998.854
Marzo 2015	1.777.871	Septiembre 2015	1.965.882
Abril 2015	1.881.272	Octubre 2015	1.988.999
Mayo 2015	1.801.444	Noviembre 2015	2.015.245
Junio 2015.....	1.823.265	Diciembre 2015	2.122.263

2. El saldo acreedor medio mensual del año 2015 es, entonces, la suma de las cifras anteriormente indicadas para cada mes dividido por doce, esto es: 1.899.213,67 euros.
3. La cifra obtenida debe redondearse por exceso al millar más próximo, lo que nos da: 1.900.000 euros.
4. Y, por fin, hay que aplicar el porcentaje del 3% a esta cifra para conocer la exacta aportación económica que la cooperativa con sección de crédito ha de realizar al fondo. En este caso el resultado es de 57.000 euros.

En el proceso de tramitación parlamentaria de la Ley 7/2017 este deber de aportación inicial fue objeto de críticas principalmente en una doble dirección. Por un lado, considerando que el porcentaje del 3% en que se fija la aportación, y que debe permitir que ingresen en el Fondo casi 17 millones de euros⁸¹, es demasiado elevado⁸². Por otro, sosteniendo que debería preverse un sistema de

81. A 31 de diciembre de 2016, la entidad ASC, S.C.C.L. estimaba que en las secciones de crédito de las cooperativas catalanas había depósitos por valor de unos 565,7 millones de euros, por lo que la aplicación del porcentaje señalado daba como resultado unas aportaciones totales al Fondo de casi 17 millones de euros.

82. Vid. en especial, DSPC 26 octubre 2016, en relación con las comparecencias de los Sres. Josep Carles VICENTE PERELLÓ (responsable de cooperativismo de la *Comissió Permanent Nacional de la Unió de Pàgessos de Catalunya*) [p. 48] y Andreu FERRER TAVERNA (coordinador técnico de la *Unió de Pàgessos de Catalunya*) [p. 56]. En este sentido, varias de las enmiendas presentadas trataron de reducir el porcentaje de la aportación, bien al 1% (enmienda número 7 del Grupo Parlamentario del *Partit Popular de Catalunya*) o al 1,5% (enmienda número 8 del Grupo Parlamentario de *Catalunya Sí que es Pot*), en tanto que alguna otra se limitaba a proponer que se estableciera que la aportación sería de «el porcentaje que determine la Comisión Gestora del Fondo en cada momento en relación con los saldos acreedores medios mensuales de cada sección de crédito» (enmienda número 8 del Grupo Parlamentario de *Ciutadans*; en catalán en el original). Vid. BOPC 5 diciembre 2016, pp. 46, 24 y 30, respectivamente.

desembolso progresivo de las cantidades con el fin de evitar una excesiva concentración de la carga económica para las cooperativas aportantes⁸³. Sin embargo, ninguna de estas críticas se tradujo en un cambio de lo que ya venía dispuesto en el Decreto Ley 2/2016.

B) Deber de mantenimiento de la aportación

Una vez realizada la contribución inicial al fondo, la cooperativa con sección de crédito debe mantener su nivel de aportación en el 3% de los saldos medios mensuales de la sección durante el año natural (artículo 32.4 LRSCC). Ello significa que puede verse obligada a realizar nuevas aportaciones si este porcentaje disminuye. En términos generales, esta disminución puede tener su origen en un aumento del volumen de depósitos de la cooperativa aportante o bien en una reducción del saldo del Fondo.

Así, en *primer* lugar, la cooperativa con sección de crédito puede tener que ingresar nuevas cantidades al Fondo como consecuencia del aumento de los saldos acreedores de la sección de crédito que, en definitiva, coloque la aportación realizada por debajo del 3% exigido⁸⁴.

Con el fin de mantener este porcentaje, cada 31 de diciembre vuelve a calcularse cuál es el 3% de los saldos acreedores medios mensuales de cada sección de crédito durante el año que termina. Si la cifra obtenida con este cálculo es superior a la que se mantiene en el fondo, la cooperativa con sección de crédito debe regularizar la aportación, como mínimo, dentro del trimestre siguiente (artículo 32.4 LRSCC).

83. Vid. p.ej., la intervención de los diputados Francisco Javier DOMÍNGUEZ SERRANO, del Grupo Parlamentario de *Ciutadans*, en DSPC 9 junio 2016, p. 29; y Òscar ORDEIG I MOLIST, del Grupo Parlamentario Socialista, en DSPC 26 octubre 2016, p. 53. Acogiendo estas críticas, la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario de *Ciutadans* proponía que el órgano rector del Fondo adoptara un calendario periódico y no discriminatorio, que no excediera de tres años, para dar cumplimiento a la obligación de aportación (vid. BOPC, 5 diciembre 2016, p. 30).

84. Por el contrario, no se prevé la devolución de aportaciones cuando el volumen de depósitos o saldos acreedores de la sección de crédito disminuya con el consiguiente aumento del porcentaje de lo ya ingresado en el Fondo. Parece, por tanto, que este exceso no se devuelve, aunque también es claro que esa cantidad reducirá (o incluso compensará totalmente) las aportaciones futuras en caso de que los depósitos o saldos acreedores de la sección de crédito vuelvan a aumentar.

Veámoslo también en un ejemplo.

1. La cooperativa mantiene 57.000 euros en el fondo, derivados del cálculo porcentual del año 2015.
2. Los saldos acreedores de cierre de cada mes del año 2016 en la sección de crédito han sido (en euros):

Enero 2016.....	2.023.463	Julio 2016.....	2.631.123
Febrero 2016.....	2.163.453	Agosto 2016	2.666.248
Marzo 2016	2.435.980	Septiembre 2016	2.543.212
Abril 2016	2.467.997	Octubre 2016	2.673.553
Mayo 2016	2.501.555	Noviembre 2016	2.701.777
Junio 2016.....	2.499.200	Diciembre 2016	2.725.230

3. El saldo acreedor medio mensual del año 2016 es, entonces, la suma de las cifras anteriormente indicadas para cada mes dividido por doce, esto es: 2.502.732,58 euros.
4. La cifra obtenida debe redondearse por exceso al millar más próximo, lo que nos da: 2.503.000 euros.
5. Seguidamente, hay que aplicar el porcentaje del 3% a esta cifra para conocer la exacta aportación económica que a la cooperativa con sección de crédito le corresponde mantener en el fondo. En este caso el resultado es de 75.090 euros.
6. Por tanto, en el primer trimestre del año 2017 deberá regularizar su situación aportando $75.090 - 57.000 = 18.090$ euros.

Ahora bien, con carácter excepcional, el órgano rector del fondo –esto es: el consejo rector de ASC, S.C.C.L.–, con informe previo favorable del departamento competente en materia de economía y finanzas –en la actualidad, el *Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda* de la *Generalitat de Catalunya*–, puede autorizar un alargamiento de aquel plazo trimestral a las cooperativas que lo soliciten motivadamente (artículo 32.6 LRSCC). Ninguna pauta más nos ofrece el legislador sobre este aplazamiento dejando abiertos significativos interrogantes como cuál es el periodo de tiempo adicional máximo que puede concederse para efectuar la regularización, si este aplazamiento devenga intereses o si el órgano rector del fondo tiene el deber de motivar su decisión favorable o contraria a aplazar el ingreso.

Y, en *segundo* término, es posible que las actuaciones del Fondo generen pérdidas que comporten una disminución de su saldo, lo que también obligará a las cooperativas que formen parte del mismo a «reconstituir» este saldo. Esta

situación viene contemplada en el artículo 32.5 LRSCC cuando, después de establecer el deber de aportación que alcance el 3% de los saldos acreedores mensuales de cada sección de crédito, añade que el Fondo «*debe disponer, como mínimo, de este patrimonio, una vez enjugadas las pérdidas que se generen*».

Las pérdidas pueden derivar de las actuaciones de apoyo financiero que el Fondo realice en las cooperativas que quieren dar de baja su sección de crédito. A grandes rasgos, el legislador prevé que estas actuaciones pueden consistir en: *uno*, el otorgamiento de garantías; *dos*, la concesión de operaciones de financiación, y *tres*, la adquisición de activos o pasivos (artículo 33.1 LRSCC). Sin embargo, hay que advertir que, a diferencia de lo que sucede con el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, estas actuaciones no tienen por qué suponer una pérdida para el Fondo si la cooperativa agraria que tiene la sección de crédito es viable. Y ello porque, *uno*, quizá no tendrá que usar la garantía que el Fondo le habrá prestado (p.ej., para conseguir un préstamo de una entidad de crédito); *dos*, es posible que pueda devolver toda la financiación que el Fondo le ha concedido para liquidar la sección de crédito; o *tres*, los activos adquiridos por el Fondo pueden venderse por un precio no inferior al de compra o los pasivos asumidos consiguen cobrarse de su deudor.

Por otra parte, el Fondo podría tener pérdidas distintas de las derivadas de las actuaciones de apoyo financiero que constituyen su objeto. Así, aunque es poco probable, la inversión de las cantidades no aplicadas en activos con el máximo de garantías financieras y un «*perfil de riesgo muy bajo*» y elevada liquidez (artículo 35.1 LRSCC) podría dar lugar a resultados negativos, con la consiguiente pérdida de parte del capital invertido. Pese a que la inversión ha de ser prudente y conservadora, hay que tener en cuenta, por un lado, que «*riesgo muy bajo*» no significa riesgo inexistente y, por otro, que como nos demuestran recientes experiencias incluso los instrumentos financieros que en el momento de su adquisición ofrecen las mayores garantías de devolución pueden suponer en el futuro un peligro para la inversión.

La pérdidas del Fondo, ordinarias o extraordinarias, «*deben imputarse a cada cooperativa, en función de su participación en el Fondo, en el ejercicio en que se generaron*» (artículo 32.5 LRSCC). Este precepto se presta a dos lecturas, en función del significado que se dé a la expresión *participación de las cooperativas en el Fondo*. Por un lado, puede entenderse que la participación en el Fondo es la aportación realizada por cada cooperativa con sección de crédito. Por otro, puede entenderse que la participación en el Fondo se refiere únicamente a aquellas que han reci-

bido soporte financiero del mismo. En el primer caso, las pérdidas se distribuirían entre todas las cooperativas con sección de crédito; en el segundo, solo entre las que hubieran recibido apoyo del Fondo. Ello sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera haber contraído la entidad administradora del Fondo si las pérdidas son resultado de su mala gestión.

C) Incumplimiento del deber de aportación

En caso de que la cooperativa con sección de crédito no realice o mantenga la aportación mínima al fondo que se establece legalmente, la cooperativa administradora del fondo (esto es: *ASC, S.C.C.L.*) debe comunicarlo al departamento competente en materia de economía y finanzas (en la actualidad: *Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda* de la *Generalitat de Catalunya*).

Una vez recibida dicha comunicación, este departamento habrá de requerir a la cooperativa para que subsane el incumplimiento del deber de aportar en un plazo no superior a tres meses (artículo 25.2 LRSCC). Como consecuencia de este requerimiento es posible que:

- 1º La cooperativa subsane el incumplimiento procediendo a aportar las cantidades legalmente exigidas, esto es: el 3% sobre los saldos acreedores mensuales de la sección de crédito calculados a 31 de diciembre del año que corresponda.
- 2º La cooperativa presente, en un plazo no superior a dos meses desde la fecha del requerimiento, un plan para el reembolso de los saldos acreedores de la sección de crédito con su baja registral, a ejecutar en un plazo no superior a seis meses desde la fecha del requerimiento (artículo 25.3 LRSCC). En este caso, la cooperativa procede a la extinción de la sección de crédito con devolución de los saldos acreedores a sus titulares. Aunque el legislador contemple esta opción como reactiva, es decir, en respuesta al requerimiento de regularización que se dirige a la cooperativa, es evidente que ésta también podrá plantearla como proactiva, esto es, antes de dicho requerimiento, cuando decida la desaparición de la sección de crédito.
- 3º La cooperativa no realice ninguna de las dos actuaciones precedentes, en cuyo caso incurre en falta muy grave [vid. artículo 18.2.i) LRSCC] que será sancionada con multa y con la baja de la sección de crédito en el Registro general

de cooperativas de Cataluña (artículo 19.2 LRSCC)⁸⁵. En la tramitación del expediente sancionador es aplicable la normativa del procedimiento administrativo común y la normativa sobre el procedimiento sancionador aplicable en los ámbitos de competencia de la *Generalitat* (artículo 22 LRSCC) que en la actualidad es fundamentalmente el *Decreto 278/1993, de 9 de noviembre*. Con todo, la presentación tardía de un plan para la liquidación de los saldos acreedores de la sección de crédito con su baja registral puede comportar la suspensión de las medidas sancionadoras, que quedarán remitidas siempre que se produzca el efectivo cumplimiento de dicho plan sin perjuicio económico para la cooperativa ni para los titulares de los saldos acreedores de la sección de crédito (artículo 19.5 LRSCC).

En definitiva, ante el incumplimiento del deber de aportación al Fondo, el legislador catalán ha optado por un sistema híbrido en el que la verificación de que la aportación se ha realizado (y en cuantía suficiente) corresponde a una entidad privada como es la cooperativa administradora del Fondo, y la tramitación del expediente sancionador y la imposición de la correspondiente sanción corresponde a la Administración pública.

D) Reglas adicionales de dotación

Además de las aportaciones de las cooperativas con sección de crédito, el legislador catalán ha previsto dos fuentes adicionales de dotación del Fondo.

85. La redacción del precepto («*La infracción establecida por el artículo 18.2.i se sanciona con la baja de la sección de crédito del Registro general de cooperativas*») lleva a sostener que la sanción consistente en la baja de la sección de crédito debe imponerse necesariamente, pese a que este carácter imperativo era mucho más marcado en el artículo 15.2 Decreto Ley 2/2016 al encabezar la fase con la expresión *en todo caso* («*En todo caso, la infracción establecida en el artículo 14.2.i se sanciona con la baja de la sección de crédito del Registro general de cooperativas*»). Por otro lado, la gravedad de la infracción y, sobre todo, la ubicación sistemática de esta sanción hacen pensar que es acumulable con la sanción de multa. A nuestro juicio, la naturaleza de entidad privada de la cooperativa administradora del Fondo ha impedido que el importe de estas multas vaya a engrosar el propio Fondo. En tercer lugar, también hay que recordar la posibilidad de que, junto con la cooperativa, sean sancionados el director general o gerente, los interventores de cuentas o los miembros del consejo rector de la cooperativa, si son hallados responsables de la infracción por comisión de una conducta dolosa o negligente (artículo 20 LRSCC). En fin, la sanción de baja de la sección de crédito no impide a la cooperativa obtener el valor liquidativo de la participación que pudiera tener en el Fondo (p.ej., en caso de aportación insuficiente).

La *primera* es que el Fondo también puede dotarse, en su caso, a partir de «[c]ualquier medio de financiación», si las aportaciones realizadas por las cooperativas con sección de crédito resultan insuficientes para el cumplimiento de su objetivo [artículo 31.2.b) LRSCC].

El legislador utiliza una expresión deliberadamente amplia que permite el recurso tanto a fondos públicos (p.ej., aportados por la *Generalitat de Catalunya*) como a fondos de procedencia privada (p.ej., aportaciones adicionales de las cooperativas con sección de crédito, contribuciones de la *Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya*, donaciones de particulares comprometidos con el movimiento cooperativo, etc.). Con todo, no hay que olvidar que estos fondos adicionales poseen un carácter extraordinario ya que se condicionan a la «falta de suficiencia de las aportaciones (...) en la consecución de su objetivo», es decir, si las aportaciones ordinarias de las cooperativas con sección de crédito no bastan para llevar a cabo las actuaciones de ayuda financiera que precise realizar el fondo.

Debido a este carácter extraordinario y a que el Fondo puede estar formado por otros recursos además de las aportaciones ordinarias de las cooperativas integrantes (p.ej., rendimientos de su inversión en instrumentos financieros), hay que sostener que la exigencia de estos otros medios de financiación no puede estar solo condicionada a la insuficiencia de tales aportaciones ordinarias, sino de la totalidad de los recursos que integren el Fondo. Y, por otro lado, también conviene aclarar que, ante la insuficiencia del Fondo, en principio no podrán utilizarse para las medidas de apoyo financiero otros recursos que posea la cooperativa administradora del Fondo, ya que este constituye un patrimonio separado afecto a su particular finalidad (artículo 31.1 LRSCC). Con todo, ha de aceptarse que la asamblea general de la cooperativa administradora pueda acordar, respetando las normas contables, el traspaso de recursos desde el patrimonio general de esta cooperativa al patrimonio afecto al Fondo. Se trataría también en este caso de un medio de financiación de los previstos que el artículo 31.2.b) LRSCC y, por tanto, condicionado a la insuficiencia del Fondo para el cumplimiento de sus fines.

Y, como segunda fuente adicional de dotación, el Fondo se integra por «[c]ualquier otro ingreso derivado de la gestión patrimonial» [artículo 31.2.c) LRSCC].

Uno de estos ingresos lo constituye la retribución que se perciba por la inversión de la parte del Fondo que no se haya usado en actuaciones de apoyo financiero a las secciones de crédito. Esta parte no utilizada «tiene que ser depositada

en una entidad financiera de solvencia reconocida y aplicada a inversiones con el máximo de garantías financieras con perfil de riesgo muy bajo y de liquidez elevada» (artículo 35.1 LRSCC).

Este precepto resulta notablemente indeterminado, en un doble sentido. Por un lado, en relación con la entidad donde debe ser depositada la parte no utilizada del Fondo, que ha de ser una entidad «*financiera de solvencia reconocida*». Y ello por cuanto no solo el concepto de «entidad financiera» no está claramente definido en nuestro derecho, sino además porque tampoco resultan claros los requisitos que ha de cumplir una entidad de este tipo para que sea «reconocida solvencia».

Por otro, la indeterminación alcanza también a los parámetros para fijar los activos en que puede invertirse la parte no aplicada del Fondo, que han de tener «*el máximo de garantías financieras*» así como un «*perfil de riesgo muy bajo y de liquidez elevada*»⁸⁶. En nuestra opinión, hubiera favorecido la seguridad jurídica establecer una norma como la prevista en el artículo 3.7 RD 2606/1996. Este precepto es más concreto al establecer que el patrimonio no comprometido del FGD «*deberá estar invertido de forma diversificada y en activos de las categorías primera o segunda del cuadro 1 del artículo 336 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, o por activos considerados seguros y líquidos por la Comisión Gestora*»⁸⁷. O, como alternativa, hubiera sido mejor precisar tales parámetros acudiendo a la *Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre*,

86. Esta indeterminación se puso ya de manifiesto durante la tramitación parlamentaria de la norma (vid. p.ej., intervención de la diputada Sra. Hortènsia GRAU JOAN, en DSPC 13 junio 2016, p. 71). En relación con esta tramitación, queremos destacar los tres grandes cambios que ha sufrido la norma con respecto al Decreto Ley 2/2016. En primer lugar, la previsión de depósito en una entidad financiera de reconocida solvencia no aparecía en este Decreto Ley (vid. proponiendo la introducción de este cambio, aunque señalando que se trata de una exigencia de sentido común, la Subdirectora General de Entidades Locales y Secciones de Crédito, Sra. Divina ALSINET BERNADÓ, en DSPC 26 octubre 2016, p. 14). En segundo término, este texto legal tampoco incluía la necesidad de que las inversiones a las que se aplicara el Fondo tuvieran el máximo de garantías financieras. Y, por último, mientras en sus orígenes bastaba con que la inversión tuviera un perfil de riesgo «*bajo*», en la redacción definitiva el perfil de riesgo tiene que ser «*muy bajo*».

87. La primera categoría está formada por los «[t]ítulos de deuda que recibirían una ponderación de riesgo del 0 % con arreglo al método estándar en lo que atañe al riesgo de crédito», y la segunda por «[t]ítulos de deuda que recibirían una ponderación de riesgo del 20 % o del 50 % con arreglo al método estándar en lo que atañe al riesgo de crédito y otros elementos admisibles definidos en el apartado 4» del artículo 336 del Reglamento.

relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, que divide los productos financieros comprendidos en su ámbito de aplicación (cfr. artículo 2) en seis grupos, en función de su nivel de riesgo (artículo 5). A nuestro juicio, además de en otros productos excluidos de tal ámbito de aplicación (p.ej., deuda pública, etc.), los recursos del Fondo podrían ser invertidos en productos financieros de la clase 1⁸⁸ o de la clase 2⁸⁹, aunque en este último caso deberá determinarse cuál es el plazo aceptable para que se consideren instrumentos financieros de «elevada liquidez».

En cualquier caso, la decisión sobre los activos en que invertir corresponde al consejo rector de la cooperativa administradora (arg. artículo 28.1 LRSCC), a propuesta de la comisión delegada (artículo 29.1 LRSCC)⁹⁰, y el control de que la inversión se ajuste a los criterios legales de máximas garantías financieras, riesgo muy bajo y elevada liquidez queda atribuida al Departamento de Economía y Finanzas de la *Generalitat de Catalunya* (arg. artículos 16.1 y 37.1 LRSCC).

E) Derecho de devolución de las aportaciones

Por regla general, en el momento en que la cooperativa acuerde la baja registral de su sección de crédito, con retorno de depósitos y otros saldos acreedores a sus titulares, tiene derecho a recuperar el valor liquidativo de su participación en el Fondo en un plazo no superior a un año (artículo 26 LRSCC). Con todo, esta regla ha de ser objeto de varias precisiones.

En *primer* lugar, el derecho de devolución de la cooperativa surge cuando se cumplen dos condiciones: de una parte, que acuerde la baja registral de la sección de crédito y, de otra, que esta baja comporte el retorno de los saldos acreedores de

88. Esta clase incluye: (1) Los depósitos bancarios en euros ofertados por entidades de crédito, incluyendo, los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo; y (2) Los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados [artículo 5.1.a)].

89. En esta clase se incluyen todos aquellos instrumentos financieros de carácter no subordinado denominados en euros que dispongan al menos de un compromiso de devolución del 100 por ciento del principal invertido con un plazo residual igual o inferior a 3 años. El instrumento financiero, o en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos compromisos, deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 1, esto es, otorgada a largo plazo por las Agencias de Calificación Externas y equivalente a BBB+ o superior [artículo 5.1.b)].

90. La propuesta de la comisión delegada debe cumplir con los criterios establecidos y aprobados por el propio consejo rector de la cooperativa administradora (artículo 29.1 LRSCC).

la sección a sus titulares. Si se dan estos requisitos, la cooperativa tiene derecho a la devolución cualquiera que sea el motivo por el que decide la desaparición de su sección de crédito (p.ej., voluntariamente, como consecuencia de una decisión estratégica libremente adoptada por la cooperativa, o forzosamente, como resultado de una sanción por no haber mantenido su nivel de aportación al Fondo) e incluyendo los casos en que la desaparición de la sección de crédito sea consecuencia del proceso de extinción de la propia cooperativa agraria. Sin embargo, puede haber supuestos en que la devolución proceda pese a no cumplir aquellos requisitos, como sucede cuando la cooperativa con sección de crédito varíe el ámbito de la actividad cooperativizada con sus socios de tal modo que quede sometida al ámbito de aplicación de otra ley. En este caso, pese a que se mantenga la sección de crédito (siempre que sea posible de acuerdo con la nueva normativa aplicable), hay que defender que la cooperativa tiene derecho al reembolso del valor de su participación en el Fondo⁹¹.

En *segundo* término, el legislador catalán establece que el derecho de devolución surge con el «*acuerdo de la baja registral de la sección de crédito*», imprecisa expresión que tanto puede referirse al acuerdo de la asamblea general de disolución de la sección de crédito como al momento en que, una vez finalizada su liquidación, el consejo rector decide solicitar que el Registro de Cooperativas inscriba la baja de la sección (cfr. artículo 20 del *Decreto 203/2003, de 1 de agosto, sobre la estructura y el funcionamiento del Registro General de Cooperativas de Cataluña*, que permite hacer la solicitud mediante certificación emitida por el secretario del consejo rector y con el visto bueno de su presidente, con firmas legitimadas notarialmente).

En *tercer* lugar, la regla general es que la devolución de las cantidades puede demorarse hasta un año. Pese a que el legislador no lo aclara expresamente, parece claro que esta decisión corresponde al consejo rector de la entidad administra-

91. Por otro lado, cabe plantearse qué sucede en el caso de que la cooperativa participe en alguna modificación estructural que comporte la desaparición *strictu sensu* de la sección de crédito pero no la devolución de los saldos de la sección a sus titulares. En términos generales, podemos distinguir dos hipótesis distintas. En *primer* lugar, tenemos los casos en que la operación suponga que tales saldos se integren en la sección de crédito de otra cooperativa (p.ej., absorción por otra cooperativa con sección de crédito, etc.), en los cuales la participación en el Fondo pasará a imputarse a esta otra cooperativa. Y, en *segundo* término, encontramos los supuestos en que los saldos acreedores de la cooperativa pasen a formar parte del patrimonio de otra entidad (p.ej., la cooperativa realiza una escisión parcial de la sección de crédito siendo beneficiaria una cooperativa de crédito, etc.), en cuyo caso parece claro el derecho de la cooperativa al reembolso de su participación en el Fondo.

dora del Fondo (arg. artículo 28.1 y 3 LRSCC) si bien no se fija ningún parámetro para orientar o limitar tal decisión. Aunque se trata de una regla protectora del Fondo (p.ej., permitiendo liquidar la inversión financiera de la parte no aplicada del Fondo, posibilitando que la cantidad ingrese en el Fondo vía regularización de aportaciones de sus miembros, etc.), también es cierto que ha de tenerse en cuenta que la cooperativa puede necesitar dicho importe para hacer frente al reintegro de los depósitos de la sección de crédito. Sin embargo, si la parte del Fondo no aplicada a actuaciones de ayuda financiera deducido el valor liquidativo de las participaciones pendientes de devolver, representa una cuantía igual o inferior al 20% de su patrimonio, entonces la devolución puede posponerse hasta que se alcance este porcentaje, y hasta un máximo de cinco años.

En *fin*, el derecho al reembolso se cuantifica en el «valor liquidativo» de la participación en el Fondo de la cooperativa con sección de crédito. Es decir, no se trata de un derecho a percibir íntegramente lo aportado sino únicamente la parte de la cooperativa que quede en el Fondo en el momento en que acuerda la baja registral de su sección de crédito. El hecho de que la devolución de las aportaciones efectuadas no esté garantizada ha sido una de las críticas más notorias y recurrentes por parte de los que se han opuesto, bien a la creación de este Fondo, bien a la forma en que ha sido configurado⁹². Con todo, no puede descartarse que el valor liquidativo del Fondo pueda incluso ser superior a las aportaciones realizadas por la cooperativa, como resultado de los ingresos derivados de las actuaciones de apoyo financiero (p.ej., intereses de operaciones de financiación) o

92. Vid. las quejas de la *Plataforma Antifons Obligatori* en «La Plataforma Anti-fons proposa noves condicions per no pagar els plats trencats de les cooperatives en fallida», *Naciódigital*, noticia de 21 de junio de 2016 [<http://www.aguaita.cat/noticia/6642/plataforma/anti-fons/proposa/noves/condicions/no/pagar/plats/trencats/cooperatives/fallida>], así como las opiniones negativas formuladas por la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley por parte de diversos diputados [vid. p.ej., DSPC 13 julio 2016 p. 67] y comparecientes en la Comisión de Economía y Hacienda del *Parlament de Catalunya* [vid. p.ej., DSPC 26 octubre 2016, pp. 30-31 y 50]. La propuesta que desde algunos sectores se hizo de que la *Generalitat de Catalunya* garantizara la devolución de las aportaciones fue descartada por entenderla incompatible con el régimen de ayudas públicas [vid. p.ej., DSPC 26 octubre 2016, pp. 54 y 56]. Finalmente, en lo que se ha considerado una especie de fórmula intermedia de consenso, se ha establecido en el artículo 24.3 LRSCC el principio de que el Fondo debe gestionarse procurando la salvaguarda del valor de las aportaciones que realizan las cooperativas con sección de crédito para nutrirlo [vid. DSPC 17 mayo 2017, pp. 53-54, 58, 63 y 67]. Sin embargo, parece claro que ni esta disposición sirve para garantizar la devolución íntegra de las aportaciones realizadas al Fondo, ni en puridad era necesario recoger dicho principio en el texto legal ya que, en cualquier caso, una diligente gestión del Fondo debe procurar la salvaguarda de su valor.

como consecuencia de las inversiones realizadas por el Fondo *ex* artículo 35.1 LRSCC.

3.6. Actuaciones de apoyo financiero del Fondo

A) Tipos de apoyo financiero

El artículo 33.1 LRSCC prevé, sin ánimo exhaustivo, tres clases de actuación de apoyo financiero que el Fondo puede prestar a las cooperativas con sección de crédito.

La *primera* es el *otorgamiento de garantías*, esto es, los recursos del Fondo servirán de aval o garantía para que la cooperativa obtenga el crédito suficiente (p.ej., de una entidad de crédito) para devolver los depósitos de los clientes de la sección de crédito. De hecho, y como ya se ha dicho, hasta la creación del Fondo el otorgamiento de avales ha sido el principal mecanismo utilizado por la *Generalitat de Catalunya* para resolver los problemas financieros de las secciones de crédito. Este aval público permitía a la cooperativa obtener un préstamo por parte de una entidad de crédito con el que hacer frente a la restitución de los saldos acreedores de su sección⁹³.

La *segunda* clase de apoyo prevista es la *concesión de operaciones de financiación*, es decir, los recursos del Fondo se prestarán a la cooperativa para que pueda devolver los depósitos de la sección de crédito (p.ej., se concederá un préstamo a la cooperativa para remediar su falta de liquidez que, a corto plazo, le impide atender las peticiones de devolución de los depósitos de la sección de crédito).

En fin, la *última* clase de apoyo financiero expresamente previsto es que el dinero del Fondo sirva para adquirir activos o pasivos de la cooperativa con sección de crédito, con el consiguiente ingreso en esta cooperativa de recursos con los que hacer frente a la devolución de los depósitos de la sección de crédito. El artí-

93. Así, por ejemplo, en el año 2014 hubo 12 cooperativas catalanas que dieron de baja su sección de crédito y 4 de ellas solicitaron aval público (por un valor total de 1,9 millones de euros) para devolver los depósitos a sus titulares. Y en el año 2015 fueron 5 las cooperativas que acordaron la baja de su sección de crédito y solo 1 de ellas solicitó aval público (por valor de 7,5 millones de euros). Resulta de interés señalar que no es extraño que la cooperativa que necesita recursos para devolver los fondos de los depositantes de la sección de crédito los obtenga de sus propios socios o, incluso, de la solidaridad del propio sector cooperativo. Vid. los datos en http://www.diarimes.com/uploads/documentos/2016/05/31/_fonsdesuport26052016v13_248d7001.pdf.

culo 33.1.c) LRSCC añade que, una vez adquirido el activo o el pasivo, la entidad administradora del Fondo puede optar por mantener su gestión o encargarla a terceros.

Téngase en cuenta que, al no tener el Fondo personalidad jurídica (artículo 25.5 LRSCC), en realidad será la entidad administradora del Fondo (es decir, ASC, S.C.C.L.) quien otorgue los avales, conceda la financiación o adquiera los activos o los pasivos (aunque sea para cederlos a terceros). En concreto, y como ya se ha dicho, la decisión de la medida o medidas de apoyo financiero que se instrumentarán será adoptada por el consejo rector de la cooperativa de segundo grado administradora, a propuesta de la comisión delegada y previo informe del departamento competente en materia de economía y finanzas de la *Generalitat de Catalunya* (artículos 28.2 y 29.1 LRSCC). Naturalmente, estas actuaciones de apoyo financiero irán solamente a cargo de la parte del patrimonio de aquella entidad formado por el Fondo. A estos efectos, no hay que olvidar que el Fondo «*se constituye como un patrimonio separado con autonomía de gestión dentro del patrimonio de la cooperativa administradora*» (artículo 31.1 LRSCC).

Las tres formas de apoyo financiero previstas no son las únicas que pueden instrumentarse. En efecto, al incluir en el artículo 33.1 LRSCC la expresión «*entre otras*», el legislador configura una lista abierta o enunciativa que, por tanto, permite al Fondo adoptar medidas distintas de las señaladas si resultan más convenientes o, incluso, necesarias para cumplir sus fines. Y, por otro lado, dentro de esta flexibilidad, también es posible que se otorguen de forma combinada dos o más tipos de apoyo financiero, estén contempladas o no por dicho precepto (p.ej., otorgamiento de garantías y simultáneamente concesión de financiación, o adquisición de activos y al mismo tiempo estipulación de un préstamo a favor de la cooperativa, etc.).

Con todo, cualquiera que sea la ayuda financiera concedida con cargo al Fondo, su fin último es la devolución por parte de la cooperativa de los depósitos y demás saldos acreedores de la sección de crédito en liquidación. Así se desprende del artículo 24.4 LRSCC, cuando dispone que el objeto del Fondo es «*contribuir a devolver a sus titulares los fondos constituidos como saldos acreedores en las secciones de crédito*». Siempre que posea en última instancia esta finalidad, la actuación de apoyo financiero ha de admitirse aunque contribuya a ese objetivo de forma indirecta (p.ej., una parte de la ayuda es financiación para realizar un plan de viabilidad de la cooperativa, etc.).

B) Criterios de las actuaciones de apoyo financiero

Pese a la importancia de la cuestión, el Decreto Ley 2/2016 no fijaba ninguna regla en torno a las condiciones en que debían ser otorgadas las medidas de apoyo financiero por parte del Fondo (p.ej., precio de la garantía, tipo de interés de la financiación, valor mínimo de los activos o pasivos adquiridos, etc.). En cambio, la Ley 7/2017 sí establece, en aras a preservar el objeto y la finalidad del Fondo, algunos criterios que deben regir las actuaciones de apoyo financiero que se acuerden (vid. artículo 34 LRSCC)⁹⁴.

Este precepto divide los criterios en dos grupos. El *primero* comprende los casos en que la medida de apoyo financiero prevista sea el otorgamiento de garantías o la concesión de operaciones de financiación. Y el *segundo* grupo incluye la actuación consistente en la adquisición de activos o pasivos de la cooperativa con sección de crédito en dificultades.

Centrándonos ahora en el primer grupo, el artículo 34.1 LRSCC condiciona tanto el otorgamiento de garantías como la concesión de operaciones de financiación, a reglas que hacen referencia, de una parte, a la viabilidad de la cooperativa con sección de crédito y, de otra, a las garantías que eventualmente puedan exigirse para prestar el apoyo financiero.

Así, por un lado, se establece que las cooperativas con sección de crédito que quieran ser receptoras del apoyo financiero deben disponer de un plan de viabilidad económica y financiera futura, evaluado por un experto independiente y cuyo cumplimiento sea objeto de seguimiento por parte de una comisión.

Esta exigencia se completa con una cuádruple previsión legal. En *primer* lugar, el plan debe prever la generación de recursos suficientes para el retorno de las deudas, entre los que pueden incluirse nuevas aportaciones de los socios de la cooperativa. En *segundo* término, el experto independiente evaluador ha de informar sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, y especialmente tiene que pronunciarse sobre la capacidad de la cooperativa para hacer frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones de ayuda financiera que va a recibir. En *tercer* lugar, este experto será nombrado por el registrador mercantil

94. Estos criterios fueron introducidos en la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley, como resultado de la aprobación de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de *Junts pel Sí* (vid. BOPC 5 diciembre 2016, p. 37).

del domicilio de la cooperativa⁹⁵. Y, por *último*, habrá de nombrarse una comisión de seguimiento del cumplimiento del plan de viabilidad. La creación de esta comisión va a cargo de la cooperativa receptora, y habrá de estar integrada por la cooperativa administradora del Fondo y por los acreedores más representativos de la cooperativa con sección de crédito⁹⁶.

Y, por otro lado, se fijan tres criterios que deben cumplir las garantías que, en su caso, exija la cooperativa administradora del Fondo para llevar a cabo la actuación de apoyo financiero⁹⁷. El *primero* es que estas garantías deben ser proporcionales al riesgo asumido de acuerdo con las condiciones normales de mercado en el momento de llevar a cabo la actuación. El *segundo* criterio es que, como es lógico, las garantías cumplan los requisitos que, en su caso, prevea la ley aplicable. En *fin*, una previsión especial se establece para las actuaciones de apoyo financiero que tienen garantía hipotecaria, en cuyo caso se exige que esta esté inscrita en el registro de la propiedad correspondiente y los bienes hipotecados sean tasados conforme a la normativa del mercado hipotecario.

Por su parte, si la actuación de apoyo financiero consiste en la adquisición de activos o de pasivos de la cooperativa con sección de crédito, la cooperativa administradora del Fondo debe seguir los criterios establecidos en el artículo 34.2 LRSCC.

95. La competencia del registrador mercantil para efectuar este nombramiento suscita fuertes dudas ya que, por un lado, podría vulnerar la competencia exclusiva estatal sobre «ordenación de los registros e instrumentos públicos» (artículo 149.1.8ª CE) y, por otro, parece obviar el hecho de que las sociedades cooperativas no se inscriben en el Registro Mercantil, salvo ciertas excepciones (entre las que no se encuentran las cooperativas agrarias con sección de crédito, salvo que reúnan los requisitos de la DA 4ª de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista). A nuestro juicio, habría sido más lógico que la designación del experto hubiera sido efectuada por la cooperativa administradora del Fondo o bien por el Departamento competente de la *Generalitat de Catalunya* en materia de economía y finanzas.

96. El precepto deja abierto tanto el número de personas que integrarán la comisión como qué ha de entenderse por «acreedores más representativos». Lo más razonable es que estos extremos se fijen en el propio plan de viabilidad y que este, además, concrete también las reglas de funcionamiento de la comisión.

97. Nótese que el artículo 34.1 LRSCC no exige que todas las actuaciones de apoyo financiero del Fondo vayan acompañadas de garantías. La decisión de requerirlas y la determinación de cuáles han de ser corresponde a la cooperativa administradora del Fondo. Ahora bien, una vez tomada esta decisión, la garantía o garantías exigidas deben cumplir necesariamente con los requisitos de *proporcionalidad y legalidad* que establece dicho precepto.

El *primero* de estos criterios se refiere al caso de que se adquiriera un bien inmueble e impone que su precio no puede ser superior al valor de tasación fijado de acuerdo con la normativa del mercado hipotecario. Esta remisión nos lleva principalmente a la *Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario*, y a la *Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras*. De la aplicación de esta norma se desprenden, en lo que ahora interesa, las siguientes tres reglas: *una*, la tasación deberá ser realizada por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro del Banco de España o bien por los servicios de tasación de una entidad de crédito (arg. artículo séptimo Ley 2/1981); *dos*, la designación de esta sociedad será realizada de mutuo acuerdo por la cooperativa con sección de crédito y por la cooperativa administradora del Fondo si bien, ante la falta de acuerdo, debe entenderse que la elección corresponde a la entidad que tenga que hacer frente a los gastos de la tasación [arg. artículo tercero bis I) Ley 2/1981]⁹⁸; y *tres*, el informe de tasación caduca a los seis meses contados desde la fecha en que haya sido emitido (arg. artículo 62.4 Orden), de modo que podrá utilizarse un informe redactado con otra finalidad (p.ej., la conclusión de un préstamo hipotecario sobre el inmueble) siempre que no haya transcurrido aquel plazo de vigencia de seis meses [arg. artículo tercero bis I) Ley 2/1981].

En *segundo* lugar, el legislador fija dos criterios para el caso en que la cooperativa administradora del Fondo se subrogue en activos crediticios que sean de titularidad de la cooperativa con sección de crédito. Por un lado, esta subrogación requiere analizar la capacidad de pago de los deudores y las garantías de cada operación con parámetros que se ajusten a condiciones normales de mercado en el momento de la instrumentación de la actuación de apoyo financiero. Por otro, se prohíbe la adquisición de activos crediticios que se encuentren en situación de morosidad o de dudoso cobro⁹⁹.

98. Esta entidad será la cooperativa con sección de crédito receptora del apoyo financiero ya que, de acuerdo con el artículo 33.4 LRSCC, «[l]os gastos que se deriven de las actuaciones de apoyo financiero que realice la cooperativa administradora corren a cargo de la cooperativa con sección de crédito que las reciba».

99. El término «*morosidad*» se refiere sin duda a una deuda que esté vencida y no haya sido pagada por el deudor, cualquiera que sea el motivo de la falta de pago (p.ej., insolvencia, discusión sobre la realidad o el importe de la deuda, etc.). Por su parte, la expresión activo crediticio «*de dudoso cobro*» se refiere a aquellos créditos todavía no impagados pero que, por las circunstancias que los rodean, es probable que no sean pagados a su vencimiento (p.ej., por la declaración de concurso del deudor, por la falta de aceptación de la letra de cambio que incorpora el crédito, etc.).

Un *último* criterio se establece para el caso en que la cooperativa administradora del Fondo asuma pasivos de la cooperativa con sección de crédito, y consiste en afirmar que esta asunción no resulta posible si tales pasivos «*comprometen la viabilidad*» del Fondo. Esta expresión jurídica indeterminada requerirá un análisis caso por caso de los pasivos que la cooperativa administradora pretenda asumir, para comprobar si esta asunción de la deuda puede poner en riesgo la finalidad del Fondo.

De todos estos criterios que deben cumplir las actuaciones de apoyo financiero que prevé el artículo 34 LRSCC se desprende que el legislador catalán ha querido que las garantías o financiación que conceda el Fondo sean remuneradas y, además, que lo sean a valor de mercado. Igualmente, ha de sostenerse que el Fondo adquirirá a este valor los activos o pasivos que adquiera a la cooperativa con dificultades. Un *primer* indicio de ello lo encontramos en que la Ley 7/2017 se refiere a tales medidas usando las expresiones «*soporte financiero*» o «*apoyo financiero*» evitando el empleo del término «*ayuda*». En *segundo* término, la aplicación del valor de mercado permitirá a los miembros del consejo rector de la cooperativa administradora sostener que han actuado «*con diligencia y lealtad a los representados*» y que han llevado a cabo «*una gestión empresarial ordenada*» (artículo 59.1 LCCat) y, en concreto, permitirá a los miembros de la comisión delegada sostener que han cumplido con su deber de «*defender los intereses de todas las cooperativas con sección de crédito y los de sus socios*» (artículo 29.2 LRSCC). Un *último* elemento indicativo de lo que sostenemos es que la Ley 7/2017 introduce al menos cuatro reglas que denotan claramente que las medidas han de ser remuneradas a valor de mercado. La *primera* exige que el precio de adquisición de inmuebles «*no puede ser superior al valor de tasación realizada de acuerdo con la normativa del mercado hipotecario*» [artículo 34.2.a)], de modo que la cooperativa no puede obtener un sobreprecio por el valor actual en el momento de la venta. La *segunda* regla establece que la cooperativa administradora «*debe velar por el traspaso al tráfico ordinario de las actuaciones de apoyo financiero en que incurra*» (artículo 33.3), lo que requiere que las condiciones de estas actuaciones sean asumibles por terceros. La *tercera* regla impone que las garantías y financiación que otorgue el FSC «*deben mantener la proporcionalidad respecto del riesgo asumido conforme a las condiciones normales de mercado*» [artículo 34.1.c)], que por tanto son el parámetro de referencia de las actuaciones de soporte financiero. Y, *en fin*, la cuarta regla confirma que estas condiciones son el parámetro de referencia al disponer que en la subrogación de activos crediticios efectuada por la

cooperativa administradora debe analizarse la capacidad de retorno de los deudores y las garantías de cada operación «*con criterios conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la instrumentación de la actuación de apoyo financiero*» [artículo 34.2.b)]. Este conjunto de circunstancias permite concluir que el legislador quiere que las actuaciones de apoyo financiero que adopte el FSC sean remuneradas a valor de mercado.

C) *Formalización de la concesión del apoyo financiero*

La previsión sobre los tipos de ayudas que pueden concederse y los criterios básicos por los que deben regirse, va acompañada de diversas reglas relativas a cómo se instrumenta el soporte financiero y a quién soporta los costes derivados de la actuación.

En primer lugar, hay que señalar que las concretas medidas de apoyo financiero a adoptar serán propuestas por la comisión delegada de la cooperativa administradora del Fondo, informadas por la *Generalitat de Catalunya* y finalmente acordadas por el consejo rector de la cooperativa administradora del Fondo. En efecto, el artículo 29.1 LRSCC establece que esta cooperativa «*debe crear una comisión delegada, que es la encargada de proponer las operaciones de financiación y las demás actuaciones de apoyo (...), de acuerdo con los criterios establecidos y aprobados por el consejo rector*». Por su parte, el artículo 28.2 LRSCC dispone que las actuaciones de apoyo financiero del Fondo «*requieren un informe previo, preceptivo y no vinculante, del departamento competente en materia de economía y finanzas*» de la *Generalitat de Catalunya*. En fin, el artículo 28.3 LRSCC señala que los acuerdos relativos a las actuaciones de apoyo financiero del Fondo «*deben adoptarse por mayoría de los miembros del consejo rector, presentes o representados*», con voto dirimente de su presidente en caso de empate. Por tanto, la decisión de las concretas medidas de apoyo financiero a adoptar corresponde al consejo rector de la cooperativa administradora del Fondo (es decir, de la cooperativa de segundo grado ASC, S.C.C.L.), si bien a propuesta de su comisión delegada y previo informe de la Administración pública catalana.

En segundo término, el legislador catalán exige que las actuaciones de apoyo financiero se instrumenten mediante documento intervenido por fedatario público (artículo 33.2 LRSCC). En términos generales, esta disposición permite formalizar aquellas actuaciones tanto en escritura pública como a través de póliza intervenida (cfr. artículo 17.1 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862). Sin

embargo, en algunos casos esta opción desaparece debido a la existencia de normas especiales que imponen la formalización de la operación mediante escritura pública notarial (p.ej., a efectos de su inscripción registral, como sucede con un préstamo con garantía hipotecaria, o con la adquisición de un bien inmueble).

En *tercer* lugar, con el fin de generar liquidez y evitar que las cooperativas con sección de crédito deban realizar nuevas aportaciones al Fondo, se establece que la cooperativa administradora «*debe velar por el traspaso al tráfico ordinario de las actuaciones de apoyo financiero que efectúe*» (artículo 33.3 LRSCC)¹⁰⁰. A nuestro juicio, esta exigencia requiere adoptar, cuando menos, las siguientes dos cautelas. De una parte, que el documento público que instrumente la actuación de apoyo financiero prevea su carácter cedible a terceros (vid. artículo 33.2 LRSCC, que impone a la cooperativa administradora «*incorporar la cláusula de cesión del crédito a terceros*» en los contratos de carácter financiero). De otra, que los parámetros de la actuación se ajusten a condiciones normales de mercado (p.ej., en cuanto a tipo de interés de la financiación concedida, precio de las garantías otorgadas, etc.).

Por *último*, el artículo 33.4 LRSCC establece que los gastos que deriven de las actuaciones de apoyo financiero que efectúe la cooperativa administradora del Fondo corren a cargo de la cooperativa con sección de crédito que las reciba. De acuerdo con este precepto esta última cooperativa debe hacer frente a la totalidad de dichos gastos y, además, como parece una norma imperativa, no resulta posible un pacto contrario de distribución de gastos o, incluso, de asunción íntegra de los mismos por parte de la cooperativa administradora del Fondo. En términos generales, los cinco tipos de gastos más importantes que puede originar la actuación de apoyo financiero son: *uno*, los derivados a la elaboración del plan de viabilidad económica y financiera de la cooperativa, incluida la retribución del experto independiente que debe evaluarlo y el coste de la comisión de segui-

100. Esta fue una de las propuestas realizadas por la Sra. Divina ALSINET BERNADÓ, Subdirectora general de Entidades Locales y Secciones de Crédito de la *Generalitat de Catalunya*, en su comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Economía y Hacienda (vid. DSPC 26 octubre 2016, p. 15). En concreto, la Subdirectora manifestó que «*a fin de generar liquidez y, por tanto, de no tener que hacer, las cooperativas con sección de crédito, nuevas aportaciones al fondo, la cooperativa administradora del fondo velará por el traspaso al tráfico ordinario de las actuaciones de apoyo en que incurra –tales como subrogación de la financiación otorgada, venta de activos...–, por lo cual todos los contratos de financiación, que se contraigan, tanto porque los otorgue como porque se subroge en préstamos o créditos que haya concedido a las cooperativas que reciben el apoyo, deberán incluir la cláusula de cesión a terceros para facilitar su traspaso*» (en catalán en el original).

miento de su cumplimiento [artículo 34.1.a) LRSCC]; *dos*, los abonados por la tasación del inmueble cuando va a servir de garantía de una operación de financiación o va a ser adquirido por la cooperativa administradora del Fondo [artículo 34.1.d) y 2.a) LRSCC]; *tres*, los asociados a las actividades de análisis de la legalidad de la operación como, por ejemplo, el estudio de los activos crediticios que se pretende adquirir para verificar que no exista situación de morosidad o dudoso cobro, o de los pasivos a asumir para comprobar que no comprometan la viabilidad del Fondo [artículo 34.2.c) y d) LRSCC]; *cuatro*, los que proceden de la formalización notarial de la actuación de apoyo financiero, así como de la eventual necesidad de su inscripción registral [artículo 33.2 LRSCC]; y *cinco*, los tributos que genere la operación, por ejemplo, en concepto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (p.ej., en caso de transmisión de inmuebles o de constitución de derechos reales de garantía).

Bibliografía

- BEL DURÁN, Paloma: «As seccions de crédito e a garantía de depósitos», *Cooperativismo e Economía Social*, nº 31, 2008/2009, pp. 201-207.
- BORJABAD BELLIDO, Ramón: *La Sección de Crédito en la Sociedad Cooperativa Agraria Catalana*, 2015, tesis doctoral, disponible en <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/286227/Trbb1de1.pdf?sequence=2>.
- BORJABAD GONZALO, Primitivo: «La sección de crédito en la sociedad cooperativa catalana», en pp. 81-105 de *El crédito (octavas jornadas cooperativas, 1990)*, número 8 de la serie *Monografías Cooperativas*, Servicio de Publicaciones de la Asociación de Expertos Cooperativos, Lleida, 1990.
- CAMPOS CLIMENT, Vanessa y SANCHIS PALACIO, Joan Ramon: «Las secciones de crédito de las cooperativas en España. Análisis de la situación actual y su papel en la financiación al cooperativismo agrario y al desarrollo rural», *Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario*, nº 9, 2005, pp. 35-52.
- DOMINGO SANZ, Joaquín: *Las secciones de crédito en las cooperativas agrarias andaluzas: situación y modelos locales de integración*, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1999
- FAJARDO GARCÍA, Gemma: «Las secciones de crédito en el ordenamiento jurídico español», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 32, Agosto 1999, pp. 9-37
- MELIÁN NAVARRO, Amparo: «Divergencias legislativas de las secciones de crédito de las cooperativas en España», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 51, Abril 2005, pp. 131-166.
- MELIÁN NAVARRO, Amparo; SANCHIS PALACIO, Joan Ramon y SOLER TORMO, Francisco: «El Crédito Cooperativo como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de crisis», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 68, Agosto 2010, pp. 111-139.
- PARCERISA, Josep: «ASC, SCCL una cooperativa de segundo grado que presta sus servicios a las secciones de crédito de las cooperativas agrarias de Cataluña», *Noticias de la economía pública, social y cooperativa*, nº 52, Enero-Junio 2009, pp. 65-72.

- PUENTE GARCÍA, Montserrat: «La capacidad operatoria de las cooperativas de crédito frente a las secciones de crédito», *REVESCO*, nº 63, 1997, pp. 121-146.
- SALINAS LA CASTA, Vicente: «Las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas valencianas», *Revista Valenciana d'Estudis Autònòmics*, nº 37, 2001, pp. 71-96.
- SERVER IZQUIERDO, Ricardo y MELIÁN NAVARRO, Amparo: «Análisis estratégico de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias españolas», *REVESCO*, nº 70, Enero-Abril 2000, pp. 147-164.
- SOLER TORMO, Francisco V.: «Las peculiaridades de las secciones de crédito de las cooperativas. Sus repercusiones en el caso valenciano», *Ciriec. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 32, Agosto 1999, pp. 115-155.
- VALENZUELA GARACH, Fernando y VALENZUELA GARACH, Francisco Javier: «Cooperativas de crédito», en pp. 1175-1206 de *Tratado de Derecho de Cooperativas* (dir.: J.I. Peinado Gracia), Vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- VICENT CHULIÁ, Francisco: «(sub) artículo 58», en *Ley General de Cooperativas*, Vol. 2º del Tomo XX de los *Comentarios al Código de Comercio y legislación mercantil especial* (dir.: F. Sánchez Calero y M. Albaladejo), EDERSA, Madrid, 1990.
- : «Impacto de la Constitución en el derecho de sociedades», en pp. 339-354 de *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013.